

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Table with 3 columns: Left column (Núm. 41.176.- Año CXXXVIII - N° 815.596 (M.R.)), Middle column (Ejemplar del día \$200.- (IVA incluido) / Atrasado \$400.- (IVA incluido)), Right column (Edición de 28 páginas / Santiago, Sábado 6 de Junio de 2015)

Main content table with 4 columns. Column 1: SUMARIO (Normas Generales, PODER LEGISLATIVO, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, MINISTERIO DE SALUD, PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, MINISTERIO DE HACIENDA). Column 2: Resoluciones from various ministries (Interior, Economía, Educación, etc.). Column 3: Decretos from various ministries (Interior, Vivienda y Urbanismo, etc.). Column 4: Postulations and resolutions from various regions (Antofagasta, Maule, etc.).

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

(IdDO 911489)

LEY NÚM. 20.836

CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A LA RELIGIOSA AUGUSTA PEDRIELLI CLEANTI

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley originado en moción de los diputados señores David Sandoval Plaza, Bernardo Berger Fett, Marcelo Chávez Velásquez, Ramón Fariás Ponce, Renzo Trisotti Martínez y Osvaldo Urrutia Soto,

Proyecto de ley:

“**Artículo único.-** Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa sor Augusta Pedrielli Cleanti”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 1 de junio de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Ministerio de Salud

(IdDO 912083)

LEY NÚM. 20.850

CREA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO Y RINDE HOMENAJE PÓSTUMO A DON LUIS RICARTE SOTO GALLEGOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la ley. Créase un Sistema de Protección Financiera para el otorgamiento de aquellos diagnósticos y tratamientos de alto costo que declare el decreto supremo del Ministerio de Salud, a que hace referencia el artículo 5º, y formará parte del Régimen General de Garantías en Salud al que se refiere el artículo 134 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°s 18.933 y 18.469.

El Fondo Nacional de Salud deberá asegurar esta protección financiera a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile.

Se excluyen de la presente ley las prestaciones efectivamente cubiertas: A) Por las leyes N°16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y N°18.490, sobre seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados y B) por el Contrato de Salud Previsional a través de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC).

De este modo, los beneficiarios de las instituciones de salud previsional, para acceder a las garantías contempladas en esta ley, deberán impetrar primero la cobertura adicional de enfermedades catastróficas contemplada en los contratos de salud previsional cuando fuere procedente. En caso contrario, se les aplicarán las disposiciones de esta ley sin exclusiones.

El otorgamiento de las prestaciones y la protección financiera del Sistema que regula esta ley serán constitutivos de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, conforme al ámbito de competencias que a cada institución le corresponda.

- Artículo 2º.-** Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley, se entenderá por:
- a) Diagnósticos de alto costo: El constituido por el conjunto de prestaciones demostradamente útiles para la confirmación y posterior control y tratamiento de la patología, cuando dichas prestaciones diagnósticas impiden el acceso al tratamiento o impactan catastróficamente en el gasto del beneficiario.
 - b) Tratamiento de alto costo: El constituido por medicamentos, alimentos o elementos de uso médico asociados a enfermedades o condiciones de salud y por las prestaciones indispensables para su confirmación diagnóstica y seguimiento, que por su costo impiden el acceso a éstos o accediendo, impactan catastróficamente en el gasto de los beneficiarios.
 - c) Beneficiarios: Los de los sistemas previsionales de salud, con exclusión de las prestaciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 1º.
 - d) Sistema de Protección Financiera: Conjunto ordenado de prestaciones y derechos en virtud del cual el Fondo Nacional de Salud se encuentra obligado a asegurar el otorgamiento de la confirmación diagnóstica y los tratamientos de alto costo a los beneficiarios, conforme a la presente ley.
 - e) Protección financiera: Aquella constituida por la cobertura del valor total de las prestaciones de la confirmación diagnóstica y los tratamientos de alto costo respecto de todos los beneficiarios de esta ley.
 - f) Red de prestadores para diagnósticos y tratamientos de alto costo: Aquellos prestadores de salud aprobados por el Ministerio de Salud para el otorgamiento de las prestaciones contempladas en esta ley, conforme al artículo 13.
 - g) Productos sanitarios: Son los regulados en los Títulos I, II y IV del Libro Cuarto del Código Sanitario.
 - h) Umbral: Cifra que resulta de la metodología definida en el artículo 6º y que define universalmente el monto sobre el cual se considera que un diagnóstico o un tratamiento son de alto costo.

TÍTULO II

DEL EJERCICIO DE LA PROTECCIÓN FINANCIERA

Artículo 3º.- Del Ejercicio de la cobertura financiera. Para contar con el sistema de protección financiera establecido en la letra e) del artículo 2º, las prestaciones deben ser otorgadas en la Red de Prestadores que correspondan en conformidad a esta ley.

Por el contrario, no contarán con el sistema de protección financiera las prestaciones no cubiertas por el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo o que, estando cubiertas, hayan sido otorgadas fuera de la Red de Prestadores que corresponden conforme a esta ley.

No obstante, tratándose de una condición de salud que implique urgencia vital o secuela funcional grave, en los términos señalados en el decreto N°369, del Ministerio de Salud, de 1985, que aprueba el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud y sus modificaciones, y que, en consecuencia, requiera hospitalización inmediata e impostergable en un establecimiento diferente de los contemplados en la Red de Prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, el beneficiario tendrá igualmente derecho a las prestaciones incluidas en el Sistema de Protección Financiera de que trata esta ley, hasta que el paciente se encuentre en condiciones de ser trasladado a alguno de los prestadores aprobados por el Ministerio de Salud.

En esta circunstancia, los costos de los tratamientos cubiertos por esta ley y que sean proporcionados por el prestador de urgencia, le serán reembolsados por el Fondo Nacional de Salud, con cargo al Fondo de Tratamientos de Alto Costo.

Sin perjuicio de lo anterior, el médico tratante en el establecimiento será quien determine el momento a partir del cual, para los efectos de este artículo, el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado, caso en el cual se aplicarán las reglas siguientes:

- a) Si la persona facultada para ello conforme al artículo 10 de la ley N°20.584, no obstante la determinación del médico, opta por la mantención en el establecimiento, los copagos que se devenguen de acuerdo a su sistema previsional de salud, a partir de ese momento no se encontrarán cubiertos por este Sistema.
- b) Si la persona facultada para ello conforme al artículo 10 de la ley N°20.584, en el mismo caso, opta por el traslado a un establecimiento que no forma parte de la red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, se aplicará lo dispuesto en la letra precedente.
- c) Si la persona facultada para ello conforme al artículo 10 de la ley N°20.584, opta por el traslado a un establecimiento de la red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, continuará la protección financiera de la que trata esta ley.

Si con posterioridad a las situaciones descritas en las letras a) y b) del inciso precedente, el paciente decide ingresar a la red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, se iniciará o reiniciará el cómputo para la protección financiera de esta ley.

Los establecimientos que reciban personas que se hallen en la situación descrita en el inciso segundo deberán informarlo a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales y al Fondo Nacional de Salud dentro de las veinticuatro horas siguientes, señalando la identidad de las mismas. Dicha información deberá registrarse a través del sitio electrónico habilitado por la referida Intendencia para estos efectos y estará inmediatamente disponible para su consulta por las Instituciones Previsionales de Salud, el Fondo Nacional de Salud, las instituciones de salud previsional de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud.

Con todo, para los efectos de este artículo, los beneficiarios del Sistema que hayan requerido atención cerrada de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley N°19.966, que establece un régimen de garantías en salud, para acceder a las garantías explícitas allí consagradas, se entenderá que dicha atención ha sido otorgada por la Red de Prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, mientras dure su hospitalización.

En caso de discrepancia acerca de la calificación de una situación como de urgencia vital o secuela funcional grave, el Fondo Nacional de Salud por sí o a través de la red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud para el otorgamiento de las prestaciones de alto costo con sistema de protección financiera, así como el paciente o su representante, podrá requerir que resuelva la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales. Igual acción se confiere al paciente o su representante.

Los mecanismos de reembolso a los prestadores a que haya lugar en virtud del presente artículo serán definidos mediante un reglamento.

La Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales, será la entidad encargada de resolver las controversias que surjan con ocasión de la aplicación de este artículo.

Artículo 4°.- Remisión. Las normas para la adecuada aplicación de lo dispuesto en este Título serán las contenidas en el reglamento al que hace referencia el artículo 10 de la ley N°19.966.

TÍTULO III

DE LA DETERMINACIÓN DE TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO CON SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA

Artículo 5°.- Del decreto que determina los diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo con sistema de protección financiera. Los tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud con sistema de protección financiera, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito

también por el Ministro de Hacienda, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y en el reglamento.

Sólo podrán incorporarse a este decreto los diagnósticos y tratamientos de alto costo que cumplan con las siguientes condiciones copulativas:

- a) Que el costo de los diagnósticos o tratamientos sea igual o superior al determinado en el umbral de que trata el artículo 6°.
- b) Que los diagnósticos y tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia, conforme al artículo 7°.
- c) Que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido recomendados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8°.
- d) Que se haya decidido la incorporación de los diagnósticos y los tratamientos, conforme a lo señalado en el artículo 9°.

Artículo 6°.- De la determinación del umbral. Los Ministerios de Salud y de Hacienda, cada tres años mediante decreto supremo, fijarán el umbral nacional de costo anual para determinar si un diagnóstico o un tratamiento es de alto costo, tomando en cuenta el cuarenta por ciento de los ingresos familiares anuales promedio una vez cubiertos los gastos básicos de subsistencia, conforme al reglamento.

Los antecedentes tenidos a la vista y los fundamentos para determinar el umbral serán públicos y formarán parte del decreto referido en el inciso primero.

Artículo 7°.- Del proceso de evaluación científica de la evidencia. El proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con Sistema de Protección Financiera y su respectiva revisión se iniciará de oficio por el Ministerio de Salud, que, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, realizará una evaluación científica basada en la evidencia disponible, para el diagnóstico o tratamiento de una condición específica de salud.

Al inicio del proceso de evaluación, la Subsecretaría de Salud Pública tomará especialmente en cuenta las opiniones y recomendaciones de diagnósticos o tratamientos a evaluar, que hagan sus comisiones técnicas asesoras y las agrupaciones de pacientes inscritas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley.

Con todo, sólo podrán ser objeto de evaluación aquellos diagnósticos y tratamientos que cumplan con la condición establecida en la letra a) del artículo 5°. Cuando razonablemente no sea posible establecer en esta instancia el valor estimado de un diagnóstico o de un tratamiento, la Subsecretaría de Salud Pública podrá igualmente, por resolución fundada, autorizar el inicio del proceso de evaluación.

La Subsecretaría de Salud Pública podrá encargar en todo o parte, respetando la ley N°19.886, los estudios necesarios para la evaluación señalada en el inciso precedente a otras instituciones públicas o privadas, considerando la especialidad del estudio por abordar.

La evaluación del respectivo diagnóstico o tratamiento deberá comprender, a lo menos, la eficacia y efectividad relativas; la seguridad, la evaluación económica, la implementación, la evaluación de las condiciones de pago a través del mecanismo de riesgo compartido, el impacto presupuestario, los efectos en las redes asistenciales, las alternativas disponibles si existieren, precio máximo industrial, las repercusiones éticas, jurídicas y sociales y el alcance y plazo de revisión de la evaluación, todo conforme a la norma técnica que al efecto dicte la Subsecretaría de Salud Pública.

En el caso de existir información con carácter de no divulgada, necesaria para la realización de la evaluación, se entenderá que concurre lo dispuesto en la letra b) del artículo 91 de la ley N°19.039, de propiedad industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Para considerar las repercusiones en las redes asistenciales del diagnóstico o tratamiento en estudio, la evaluación deberá tener en cuenta un informe elaborado para esos efectos por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

La evaluación considerará que las garantías de las que trata esta ley serán las mismas para todos sus beneficiarios, pero sobre la base de esta evaluación podrán ser diferentes para una misma prestación, conforme a criterios clínicos generales de carácter de efectividad terapéutica, tales como enfermedad, edad u otras variables objetivas que sean pertinentes.

La evaluación concluirá con un informe que será público, pero no recurrible. La publicación deberá efectuarse en el sitio electrónico del Ministerio de Salud, a lo menos quince días antes del inicio del proceso de recomendación.

Las instituciones relacionadas con el área de la salud deberán proporcionar la información que les sea requerida por la Subsecretaría de Salud Pública, para los efectos de realizar la evaluación científica de la evidencia.

Un reglamento del Ministerio de Salud regulará el proceso de evaluación científica de la evidencia, el que deberá contemplar, entre otros, que se desarrolle con observancia a normas éticas y de transparencia.

Artículo 8°.- Del proceso de elaboración de recomendación priorizada. La evaluación técnica de la evidencia será analizada y priorizada sobre la base del valor científico, económico y social que el tratamiento importe. Este proceso estará a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, que constituirá la Comisión de Recomendación Priorizada y que será creada por resolución del Ministerio de Salud.

La Comisión estará conformada por 12 miembros de reconocida idoneidad en los campos de la medicina, salud pública, economía, bioética, derecho sanitario y expertos en fármacos, elementos de uso médico y alimentos, quienes serán designados por el Ministro de Salud, previa convocatoria pública. Dentro de esta Comisión, la sociedad civil participará a través de dos representantes de las agrupaciones de pacientes registradas conforme al artículo 30, elegidos por éstas. La Comisión será presidida por el Subsecretario de Salud Pública.

La Comisión deliberará, sobre la base de los elementos de valor científico, económico y social, acerca de la pertinencia de la inclusión de los tratamientos en el decreto señalado en el artículo 5°. La recomendación deberá contener la propuesta de contenido y el plazo de revisión de la decisión.

Para la formulación de su recomendación, la Comisión de Recomendación Priorizada podrá considerar, entre los antecedentes, ofertas formales de precio de los potenciales proveedores de los productos sanitarios en estudio. A solicitud del proveedor, dicha información deberá ser mantenida en carácter de confidencial. Esta presentación no será vinculante para el Estado, ni para la decisión de compra, la que se realizará conforme a lo establecido en la ley N° 19.886 y las disposiciones contenidas en el Título VIII de esta ley. Con todo, el precio informado a la Comisión de Recomendación Priorizada deberá ser respetado por el proveedor en caso de presentarse al proceso de compra respectivo, no pudiendo ser superior a este. En este caso, pasará a ser pública la presentación efectuada en la etapa de la que trata este artículo.

De lo obrado, la comisión levantará un acta pública que podrá ser impugnada por cualquier interesado dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos ante la misma Comisión.

La elección de los integrantes, el funcionamiento y el proceso deliberativo de las comisiones se regularán a través del reglamento que dicte, al efecto, el Ministerio de Salud, considerando los principios de participación social, probidad, independencia, ética y transparencia.

Los integrantes de la Comisión al momento de asumir su encargo deberán presentar una declaración de intereses que contenga la individualización de las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe.

No podrán ser miembros de la comisión las personas que incurran en una o más de las siguientes inhabilidades:

- a) Tener algún interés personal en el asunto específico a debatir por la comisión o tenerlo su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, o una persona jurídica en la que tenga, directa o indirectamente, el diez por ciento o más de la participación, acciones o derechos, cualquiera sea su tipo, o ejerza en ella funciones de administración o control.
- b) Haber recibido financiamiento, total o parcial, transferencias monetarias, o aportes de cualquier naturaleza destinados a viajes, consultorías, asesorías, investigación o cualquiera otra actividad, sea para uso personal, de su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive. Lo anterior, también será aplicable a los titulares de registros, permisos o autorizaciones sanitarias; a los establecimientos del área de la salud; o a cualquier persona natural o jurídica que participe en la producción, distribución, intermediación, comercialización, expendio o administración de productos farmacéuticos, alimentos especiales o elementos de uso médico. Igualmente se incluye en esta inhabilidad la circunstancia de haber recibido los beneficios señalados precedentemente, aquella persona jurídica en la cual el interesado tenga, directa o indirectamente, el diez por ciento o más de la participación, acciones o derechos, cualquiera sea su tipo, o tenga en ella la administración o control de la misma.

- c) Participar, directa o indirectamente, en la propiedad de registros, permisos, autorizaciones sanitarias, patentes industriales o cualquiera clase de propiedad industrial o intelectual de productos farmacéuticos, alimentos especiales o elementos de uso médico; en la propiedad de establecimientos del área de la salud; o en la propiedad de cualquier persona natural o jurídica que participe en la producción, distribución, intermediación, comercialización, expendio o administración de productos farmacéuticos, alimentos especiales o elementos de uso médico. Se incluye en esta inhabilidad cualquier otro tipo de participación no propietaria que genere beneficios económicos al interesado o a las personas naturales o jurídicas indicadas en la letra precedente.

Las inhabilidades señaladas en las letras b) y c) precedentes se aplicarán a las situaciones señaladas, ocurridas dentro de los veinticuatro meses anteriores al nombramiento del interesado como miembro de la comisión. Del mismo modo, los miembros de una comisión no podrán incurrir en las conductas indicadas en las letras b) y c) precedentes dentro de los veinticuatro meses siguientes al término del trabajo de la comisión respectiva.

Si a alguno de los representantes de las agrupaciones de pacientes le fuera aplicables las inhabilidades antes señaladas, las agrupaciones podrán reemplazar al representante inhabilitado. De lo contrario, perderán la representación.

Las recusaciones en contra de los integrantes de la Comisión deberán ser presentadas dentro del plazo establecido para el recurso de impugnación a que se refiere el inciso quinto.

Si con posterioridad a este plazo se conoce alguna inhabilidad de algún miembro de la comisión, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 53 y siguientes de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

La infracción de las normas sobre conflictos de intereses o inhabilidades establecidas en los incisos precedentes será sancionada según lo dispuesto en el artículo 12, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

Artículo 9°.- Del proceso de decisión. Los Ministerios de Salud y de Hacienda, sobre la base de la evaluación y recomendación, determinarán mediante decreto supremo fundado los diagnósticos y tratamientos que cubrirá el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. En éste, se establecerán además el plazo y contenido de la revisión de la decisión, conforme a lo dispuesto en este Título.

Para estos efectos, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá elaborar estudios respecto de la sustentabilidad financiera del Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, los que serán públicos y servirán de base para la dictación del decreto señalado en el inciso anterior.

El conjunto de Tratamientos de Alto Costo que cubrirá el Sistema de Protección Financiera deberá tener un costo anual esperado, para el período de vigencia del correspondiente decreto, igual o inferior al ochenta por ciento del valor esperado al 1 de enero del año siguiente a su dictación, de los recursos totales con que contará el Fondo en dicho año.

Con todo, si a la fecha de dictación del segundo decreto y de los sucesivos se prevé que se superará el porcentaje señalado en el inciso anterior, considerando el conjunto de diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera del decreto vigente, el nuevo decreto sólo podrá incluir los antedichos diagnósticos y tratamientos.

El Fondo Nacional de Salud deberá proporcionar a la Dirección de Presupuestos la información necesaria para la elaboración de los señalados estudios, aun cuando ella contenga datos sensibles conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, debiendo, en todo caso, guardar respecto de ella la debida reserva o secreto.

Este decreto deberá contener al menos una nómina de los diagnósticos, medicamentos, alimentos y elementos de uso médico, indicando las enfermedades o condiciones de salud asociadas a cada uno de ellos, conforme a los protocolos que al efecto dicte el Ministerio de Salud, y la fecha de inicio de la entrada en vigencia de la protección financiera.

La información contenida en el sistema deberá mantenerse a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, actualizado, al menos, una vez al mes.

Artículo 10.- De la vigencia y modificación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera. El decreto que apruebe los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera y sus modificaciones entrará en vigencia el primer día del sexto mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, las modificaciones podrán entrar en vigencia antes, cuando existan circunstancias calificadas y fundamentadas en el decreto respectivo.

Los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera tendrán una vigencia de tres años. Si no se hubieren modificado al vencimiento de este plazo, se entenderán prorrogados por otros tres años, y así sucesivamente.

Con todo, en circunstancias especiales, el Presidente de la República podrá disponer, por decreto fundado, la modificación antes de cumplirse el plazo indicado en el inciso anterior.

En los casos en que un diagnóstico o un tratamiento de alto costo con protección financiera sea incorporado al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, regulado por la ley N°19.966, pasará a regirse por esta normativa. En este caso, la garantía de protección financiera para dicho diagnóstico o tratamiento de alto costo continuará vigente y exigible para los beneficiarios de los Sistemas de Salud que no se encuentran incorporados al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, mientras subsista su eficacia o utilidad terapéutica, de lo que deberá dejarse constancia en el decreto modificatorio.

Artículo 11.- Modificación de un tratamiento. En el caso que, conforme al procedimiento regulado en este Título, un tratamiento de alto costo deba ser modificado por otro de mayor utilidad terapéutica, el respectivo decreto deberá establecer, de ser necesario, la forma en que se realizará la transición para el uso del nuevo tratamiento, considerando la factibilidad técnica del cambio, las condiciones de salud de los pacientes y la continuidad de los tratamientos.

Artículo 12.- De la infracción a las normas de este Título. El que por medios o maniobras ilegítimas ejecute acciones de cualquier clase que tengan por objeto inducir o incentivar a los pacientes o a cualquier persona, autoridad o funcionario para solicitar, exigir, prescribir, recomendar o determinar un diagnóstico o tratamiento de alto costo o alguno de sus componentes sujeto al Sistema de Protección Financiera, por motivos o bajo un procedimiento distinto de los regulados en esta ley, será sancionado con multa de cien a diez mil unidades tributarias mensuales, atendida la naturaleza y gravedad de la infracción. Si el infractor obtuviere un beneficio económico por la comisión de la infracción, la multa será equivalente al monto del beneficio percibido, si éste fuera superior a las diez mil unidades tributarias mensuales. Para el caso de las reincidencias, éstas podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original. Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere existir.

Si estas infracciones fueren cometidas por personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades relacionadas con el área de la salud, podrán ser sancionadas, además, con la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos concedidos, según corresponda, o con la eliminación del registro del artículo 30, en el caso de las agrupaciones de pacientes.

Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

El plazo de prescripción de la infracción, así como de la sanción será de cuatro años.

El procedimiento administrativo sancionatorio se regirá por las reglas establecidas en el Libro Décimo del Código Sanitario y será sustanciado y resuelto por la autoridad sanitaria respectiva, según la naturaleza del producto.

Asimismo, sobre la base de los antecedentes que obren en el sumario sanitario respectivo, la Subsecretaría de Salud Pública podrá revocar la aprobación a que alude el artículo 13.

TÍTULO IV

DE LA OBLIGATORIEDAD DEL OTORGAMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Artículo 13.- Obligatoriedad del otorgamiento de las prestaciones de confirmación diagnóstica y de los tratamientos. El Fondo Nacional de Salud deberá dar cumplimiento obligatorio al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos

y Tratamientos de Alto Costo que regula esta ley para los beneficiarios señalados en su artículo 2°. Las prestaciones contempladas en el Sistema se otorgarán con las garantías explícitas señaladas en las letras b) y c) del artículo 4° de la ley N°19.966, además de la garantía financiera contemplada en esta ley.

El decreto supremo dictado conforme a lo dispuesto en el artículo 5° indicará, para cada diagnóstico y tratamiento, el momento a partir del cual los beneficiarios tendrán derecho a la protección financiera. Los prestadores de salud, el Fondo Nacional de Salud, las instituciones previsionales de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad Pública, y las instituciones de salud previsual deberán informar a los beneficiarios de esta ley que tienen derecho a la protección financiera otorgada por el Sistema, en la forma, oportunidad y condiciones que establezca para estos efectos el reglamento.

Para otorgar las prestaciones de confirmación diagnóstica y los tratamientos, los prestadores, sean públicos o privados, deberán estar acreditados en la Superintendencia de Salud, en la forma, condiciones y oportunidad establecidas en la letra b) del artículo 4° de la ley N°19.966 y contar con la aprobación del Ministerio de Salud, conforme al reglamento que se dicte al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente y en circunstancias calificadas, a través de un decreto supremo fundado del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública podrá autorizar el otorgamiento de las prestaciones de confirmación diagnóstica y de los tratamientos a los prestadores que no hayan obtenido dicha acreditación. Se entenderá que concurre una circunstancia calificada cuando no exista algún otro prestador aprobado por el Ministerio de Salud que haya obtenido la acreditación, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos a los beneficiarios en condiciones adecuadas de oportunidad y accesibilidad.

A través de decreto del Ministerio de Salud, se definirá la red de prestadores que otorgará las prestaciones sujetas al sistema de protección financiera de que trata esta ley. Para que los prestadores que formen parte de la red puedan otorgar tales prestaciones deberán suscribir, previamente, un convenio con el Fondo Nacional de Salud.

Para todos los efectos legales, los prestadores que hayan suscrito dicho convenio con el Fondo Nacional de Salud se entenderán adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud en todo lo relacionado con el otorgamiento de prestaciones contempladas en esta ley.

En caso de incumplimiento del Fondo Nacional de Salud o de los prestadores de salud que formen parte del Sistema de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, que digan relación con las coberturas y beneficios que otorga esta ley, el afectado o quien lo represente podrá reclamar ante la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 117 y siguientes del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, la que deberá resolver la controversia.

Adicionalmente, a través del procedimiento administrativo respectivo, la Superintendencia de Salud podrá aplicar frente al incumplimiento de las obligaciones de este Título, algunas de las siguientes acciones:

1. Amonestación.
2. Multa de diez a mil unidades tributarias mensuales.

Tratándose de establecimientos asistenciales públicos podrá además solicitar la instrucción del respectivo sumario administrativo.

Asimismo, remitirá los antecedentes al Fondo Nacional de Salud a efectos que adopte las medidas que correspondan en relación a los convenios suscritos.

La Superintendencia de Salud siempre podrá iniciar de oficio este tipo de procedimientos.

Las infracciones y sanciones dispuestas en este Título prescribirán en el plazo de dos años.

El otorgamiento de las prestaciones no contempladas en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo se regirá conforme a las normas que correspondan de acuerdo al Sistema previsual de salud del beneficiario.

Artículo 14.- Atención en la red de prestadores. Para tener derecho al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo los beneficiarios deberán atenderse en la red de prestadores que les corresponda, la cual se encontrará definida a través de decreto del Ministerio de Salud, conforme a lo señalado en el artículo 13.

Las atenciones efectuadas en la red de prestadores definida en el inciso anterior, y las asociadas pero no contempladas en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, se entenderán efectuadas en la red asistencial definida por el respectivo sistema previsional de salud del paciente, para todos los efectos legales y de coberturas.

TÍTULO V

DE LA CONTINUIDAD DE LOS TRATAMIENTOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Artículo 15.- Suspensión o extinción del registro sanitario o de la autorización para distribuir o comercializar. Si conforme al Código Sanitario es suspendida o prohibida la distribución o comercialización de un producto sanitario contemplado en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, o bien, su registro es suspendido, cancelado o ha perdido vigencia, el Fondo Nacional de Salud no estará obligado a su entrega, sino hasta haberse completado el procedimiento previsto en los artículos 31 y siguientes.

En tales circunstancias, siempre que no exista en el mercado chileno otra alternativa terapéutica al precio máximo industrial referido en el artículo 7° y sólo con la finalidad de asegurar el abastecimiento de los productos sanitarios y garantizar a la población la continuidad de los tratamientos que se encuentran incorporados al Sistema del que trata esta ley, previa autorización del Ministerio de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá, excepcionalmente, importarlos y distribuirlos, independientemente si cuentan o no con autorización o registro sanitarios, mientras se inicie el procedimiento regulado en el artículo 31 o bien, mientras se restablece su abastecimiento.

En el caso de productos sujetos a derechos de propiedad industrial, se entenderá que las circunstancias antes descritas constituyen razones de salud pública para los efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 51 de la ley N°19.039, de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La solicitud a que hace referencia el artículo 51 bis B de ese cuerpo legal será presentada por el director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Los titulares de los registros o autorizaciones sanitarias, los productores o los importadores serán responsables civilmente por la falta de continuidad de los tratamientos.

Artículo 16.- Suspensión voluntaria. Los titulares de los registros sanitarios o autorizaciones sanitarias, productores o importadores de los productos sanitarios incorporados al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo o al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, no podrán suspender voluntariamente la distribución de los productos y deberán garantizar su adecuado abastecimiento. Con todo, podrán suspender voluntariamente la distribución cuando esta decisión se base en el conocimiento que el producto puede causar daños a la salud de la población, lo que deberá ser informado inmediatamente al Instituto de Salud Pública.

Asimismo, cualquier circunstancia que ponga en riesgo el abastecimiento de los productos sanitarios deberá ser comunicada por el titular del registro o autorización sanitaria, productor, importador o distribuidor, dentro de las veinticuatro horas siguientes de conocido el hecho, al Ministerio de Salud, al Fondo Nacional de Salud, a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a la Superintendencia de Salud. El Instituto de Salud Pública deberá poner esta información en conocimiento del público general, mediante una publicación en el sitio electrónico institucional.

Dicha comunicación no exime de las obligaciones y responsabilidades que corresponden por desabastecimiento al titular del registro o autorización sanitaria, productor, importador o distribuidor y la infracción será sancionada conforme al artículo 18, considerándose como falta reiterada cada día de desabastecimiento en el sistema.

Los establecimientos de salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pública y los establecimientos regulados por el Título III del Libro Sexto del Código Sanitario, que tomen conocimiento por

cualquier causa de quiebres en los stocks o desabastecimiento de los productos sanitarios contemplados en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, deberán comunicarlo a las entidades señaladas en el inciso anterior, en igual plazo.

Tratándose de la cancelación de registros o autorizaciones sanitarias, registrarán las limitaciones contempladas en este artículo.

Artículo 17.- Continuidad de tratamientos de acuerdo con los sistemas previsionales de salud y los ensayos clínicos. Los tratamientos prescritos y financiados a un beneficiario conforme a su sistema previsional de salud, no podrán dejar de otorgarse a pretexto que se encuentran incorporados al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y que el paciente no cumple con los criterios clínicos de inclusión.

Asimismo, los pacientes sujetos de ensayos clínicos tendrán derecho por parte del titular de la autorización especial para uso provisional para fines de investigación o del titular del registro, en su caso, a la continuidad gratuita de los tratamientos recibidos conforme al protocolo de estudio, aun cuando éste haya finalizado y mientras subsista su utilidad terapéutica.

Artículo 18.- Infracciones y sanciones. Las infracciones a este Título se registrarán por las disposiciones contenidas en el Libro Décimo del Código Sanitario y serán conocidas y resueltas por la autoridad sanitaria respectiva, según la naturaleza del producto.

Los titulares de los registros o autorizaciones responderán de los perjuicios que causen por esta infracción a los pacientes, prestadores y al Fondo Nacional de Salud.

TÍTULO VI

SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Artículo 19.- Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Créase un Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo destinado al financiamiento total o parcial de diagnósticos y tratamientos de alto costo con Sistema de Protección Financiera, incluidos en el decreto a que se hace referencia en el artículo 5° para los beneficiarios señalados en la letra c) del artículo 2°.

Artículo 20.- Aportes. El Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo se financiará con los siguientes recursos:

- a) Aportes fiscales anuales por un monto de hasta cien mil millones de pesos. Dicho monto se reajustará el 1 de enero de cada año en el 100% de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes de noviembre del año ante precedente y noviembre del año anterior a la fecha en que opere el reajuste respectivo.
- b) Donaciones que se le hagan y herencias y legados que acepte el Ministerio de Hacienda, lo que deberá hacer con beneficio de inventario.
- c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.
- d) La rentabilidad que genere la inversión de los recursos del mismo.

Los recursos para el financiamiento del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo estarán contemplados en la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Dichos recursos podrán invertirse en los instrumentos, operaciones y contratos que establezca el Ministerio de Hacienda, mediante instrucciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°20.128.

Artículo 21.- Remisión. Mediante un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, se establecerán los mecanismos, procedimientos y demás normas necesarias para la aplicación de los recursos y rendición de cuentas del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Estos recursos podrán ser utilizados a partir de la entrada en vigencia del primer decreto a que se refiere el artículo 5°.

El Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo traspasará recursos al Fondo Nacional de Salud, de acuerdo a lo establecido en dicho reglamento.

El monto de los recursos traspasados será equivalente al costo de los tratamientos.

TÍTULO VII

DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE VIGILANCIA Y CONTROL Y DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Artículo 22.- De la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Existirá una Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo integrada por cuatro representantes de asociaciones de pacientes, de las registradas según el artículo 30; dos representantes de asociaciones científicas; dos académicos de facultades de medicina de alguna institución de educación superior acreditada institucionalmente, de conformidad con la ley N°20.129, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y cuatro expertos del área de la salud designados por el Ministro de Salud, uno de los cuales asumirá la secretaría ejecutiva.

Esta Comisión tendrá como función asesorar a los ministros de Salud y de Hacienda, a través del monitoreo del funcionamiento de este Sistema y de la respectiva elaboración de recomendaciones.

Artículo 23.- Información a la Comisión. Esta Comisión estará especialmente facultada para conocer y ser informada por las instituciones relacionadas con este Sistema, de las siguientes materias:

- a) Procedimientos para asegurar el otorgamiento oportuno e íntegro de las prestaciones contempladas en el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.
- b) Criterios utilizados por el Fondo Nacional de Salud para cumplir con las políticas e instrucciones emanadas del Ministerio de Salud y, dentro del ámbito de sus atribuciones, por la Superintendencia de Salud.
- c) Recibir una cuenta trimestral del Fondo Nacional de Salud sobre la ejecución presupuestaria de los recursos transferidos por el Fondo y las coberturas otorgadas, incluyendo el tratamiento de datos sensibles relacionados con la información de pacientes, en los términos señalados por la ley N°19.628.
- d) Ejecución de los convenios referidos en el artículo 13.
- e) Del cumplimiento y ejecución de las materias tratadas en los Títulos IV, V y VIII.
- f) En general, de las medidas, instrumentos y procedimientos destinados al adecuado cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de las funciones establecidas en esta ley para el otorgamiento de las prestaciones incorporadas al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.

La Comisión no estará facultada para intervenir en la administración del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.

Artículo 24.- Miembros de la Comisión. Los miembros de la Comisión serán designados por decreto supremo del Ministro de Salud y durarán cuatro años en sus funciones.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, y suscrito por el Ministro de Hacienda, regulará las funciones e integración de esta Comisión, la elección de sus miembros, el régimen de prohibiciones e inhabilidades al que estarán sometidos, las causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento.

Los representantes de asociaciones de pacientes de enfermedades que integren la Comisión serán elegidos entre las personas que formen parte de las organizaciones registradas según el artículo 30, respetando la plena autonomía de las mismas. La elección deberá ajustarse a principios democráticos, participativos, transparentes y pluralistas.

La Subsecretaría de Salud Pública otorgará asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.

A su vez, la Comisión podrá solicitar asistencia técnica a los órganos y servicios públicos pertinentes.

Artículo 25.- Informe de la Comisión. La Comisión deberá emitir un informe anual que contenga los resultados y conclusiones de sus observaciones y la formulación de recomendaciones, el que deberá ser remitido a los ministros de Salud y de Hacienda y difundido conforme al procedimiento y modalidades que establezca el reglamento.

Artículo 26.- Informes del Fondo Nacional de Salud y la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema de Servicios de Salud. El Fondo Nacional de Salud y la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud deberán informar a la Superintendencia de Salud, al menos trimestralmente, de los precios unitarios, frecuencias y prestaciones otorgadas que formen parte del Sistema de Protección Financiera de Alto Costo y que hayan sido requeridas en este carácter. Esto, de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Salud mediante circulares de general aplicación.

Artículo 27.- Sistema de información. El Fondo Nacional de Salud deberá implementar un sistema de información que permita el seguimiento, monitoreo y control del otorgamiento de las prestaciones contempladas en el Sistema, así como del gasto ejecutado para cada una de ellas, conforme al reglamento.

Asimismo, el Sistema deberá contener un registro de los productos sanitarios que han sido incluidos en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, los respectivos proveedores, precios de compra y duración de los contratos celebrados con la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, conforme con lo dispuesto en el artículo 31. Esta información deberá estar disponible en el sitio electrónico del Fondo Nacional de Salud y actualizarse al menos mensualmente.

La información contenida en el sistema deberá mantenerse a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, actualizado, al menos, una vez al mes.

Artículo 28.- Convenios de entrega y actualización de información. Los prestadores que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13 deberán celebrar un convenio con el Fondo Nacional de Salud para el otorgamiento de las prestaciones, el que contendrá, entre otros, la obligatoriedad para aquellos de suscribir, registrar y actualizar el Sistema de información de acuerdo al reglamento.

Artículo 29.- Acceso al Sistema. El Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Dirección de Presupuestos y la Comisión de la que trata este Título podrán acceder al sistema de información y a la información correspondiente a la salud de los pacientes. Los funcionarios y miembros de la Comisión deberán guardar, respecto de esta última, la debida reserva o secreto, sujetándose en todo a lo dispuesto en la ley N°19.628.

Artículo 30.- Registro de asociaciones o agrupaciones de pacientes. El Ministerio de Salud llevará un registro público de las asociaciones o agrupaciones de pacientes de enfermedades o problemas de salud contemplados en el Sistema de Protección Financiera, conforme al reglamento.

TÍTULO VIII

DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Artículo 31.- Adquisición. La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud será la entidad encargada de adquirir los productos sanitarios necesarios para el otorgamiento de las prestaciones cubiertas por el Sistema del que trata esta ley.

Las adquisiciones se realizarán conforme a las normas contenidas en la ley N°19.886 y su reglamento. Sin perjuicio de ello, por resolución fundada y en circunstancias calificadas, como la insuficiente capacidad de oferta de los productos sanitarios por parte de los proveedores o la necesidad de velar por la continuidad de los tratamientos de los pacientes, la Central de Abastecimiento podrá contratar un mismo producto sanitario con más de un proveedor.

Asimismo, cuando la referida Central sea titular de un registro, podrá contratar a través de la modalidad de trato directo la compra y/o importación del producto sanitario.

La Central de Abastecimiento podrá solicitar ante la autoridad sanitaria que corresponda, según la naturaleza del producto, el registro sanitario provisional o autorización sanitaria pertinente, en circunstancias de desabastecimiento, inaccesibilidad o escasa oferta de los productos sanitarios requeridos para el

otorgamiento de las prestaciones, lo que será determinado por resolución del Ministerio de Salud. Este registro o autorización no obstará a la libre comercialización del producto por parte de terceros.

Artículo 32.- Financiamiento. La adquisición de productos sanitarios será financiada directamente por el Fondo Nacional de Salud, que podrá entregar anticipos a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud para financiar los trámites, entre otros, de registro, importación y aduana.

Artículo 33.- Condición resolutoria. Se tendrán por resueltos de pleno derecho los contratos de suministro vigentes cuando los precios de los productos sanitarios adquiridos por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud experimenten variaciones anuales superiores a las del Índice de Precios al Consumidor, durante la vigencia del decreto establecido en el artículo 5°, o excedan, en su caso, del precio máximo industrial determinado durante el proceso de evaluación científica de la evidencia.

Si no hubiere en el mercado chileno otro proveedor con el precio reajustado según la regla señalada anteriormente, la Central de Abastecimiento podrá adquirir los productos de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 31.

TÍTULO IX

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Artículo 34.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Sanitario:

1) En su artículo 100:

a) Reemplázanse los incisos cuarto y quinto, por los siguientes:

“Prohíbese la donación de productos farmacéuticos realizada con fines publicitarios, como asimismo los incentivos de cualquier índole que induzcan a privilegiar el uso, prescripción, dispensación, venta o administración de uno o más productos farmacéuticos a cualquier persona que participe en la venta. Con todo, el Ministerio de Salud, mediante decreto supremo fundado, podrá incluir dentro de esta prohibición algunos elementos de uso médico.

Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas, por parte de laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos o establecimientos farmacéuticos, por quienes los representen o, en general, por quienes tengan algún interés en que se privilegie el uso de uno o más productos o dispositivos.”.

b) Agréganse los siguientes incisos sexto y séptimo, nuevos, pasando los actuales sexto y séptimo a ser octavo y noveno, respectivamente:

“Los titulares de registros, permisos o autorizaciones sanitarias, los establecimientos del área de la salud y cualquier persona natural o jurídica que participe en la producción, distribución, intermediación, comercialización, expendio o administración de productos farmacéuticos, alimentos especiales o elementos de uso médico, podrán financiar, total o parcialmente, transferir o entregar, a título gratuito o a precios preferentes, esta clase de productos a los pacientes que los requieran, sujeto a las regulaciones legales, caso en el cual el beneficiario tendrá derecho a continuar percibiendo el beneficio otorgado, en iguales o mejores condiciones, mientras subsista la utilidad terapéutica del producto de que se trate.

Con todo, esta restricción no impide la aplicación de beneficios otorgados al consumidor final a través de convenios, prestaciones de bienestar, acuerdos colectivos u otros similares que signifiquen rebajas o descuentos en los precios en forma genérica y que, en ningún caso, impliquen el incentivo conforme al presente artículo.”.

2) Añádense los siguientes Títulos V y VI, nuevos, en el Libro Cuarto, a continuación del artículo 111:

“TÍTULO V
DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
ELEMENTOS DE USO MÉDICO

Artículo 111 A.- Los productos farmacéuticos y los elementos de uso médico para ser utilizados en investigaciones científicas en seres humanos deberán contar

con una autorización especial para su uso provisional, otorgada por el Instituto de Salud Pública conforme al presente Libro.

La autorización especial para uso provisional con fines de investigación se requerirá para todo producto farmacéutico o dispositivo médico, sea porque no cuenten con el respectivo registro sanitario o bien, contando con éste, se pretenda su utilización de manera distinta a la registrada. Con todo, el Ministerio de Salud podrá establecer, mediante decreto supremo, la exención de esta exigencia a los elementos de uso médico cuya utilización no conlleve un riesgo relevante para las personas.

Para efectuar la solicitud de autorización especial para uso provisional con fines de investigación, el solicitante deberá presentar, previa aprobación conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N°20.120, el protocolo de investigación, el formato de consentimiento informado, la póliza de seguros y todo otro antecedente que establezca el reglamento.

Esta autorización especial no podrá tener una duración mayor a un año, contado desde la fecha de la resolución que la concede, y podrá ser renovada por períodos iguales y sucesivos, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en este Código, en la ley N°20.120 y en los respectivos reglamentos.

Los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que cuenten con autorización especial para uso provisional con fines de investigación sólo podrán ser destinados al uso que la misma autorización determine, quedando prohibida su tenencia, distribución y transferencia a cualquier título o su uso de manera distinta a la registrada.

El Instituto de Salud Pública deberá llevar un registro público de todas las investigaciones científicas en seres humanos con productos farmacéuticos o elementos de uso médicos autorizadas para realizarse en el país, con las menciones que señale el reglamento. Dicho registro estará sujeto a las disposiciones del artículo 7° del artículo primero de la ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Artículo 111 B.- El titular de la autorización, la entidad patrocinante, el investigador principal y el respectivo centro donde se realice la investigación serán responsables de notificar al Instituto de Salud Pública y al Comité Ético Científico que corresponda, en el plazo y según la forma que establezca el reglamento respectivo, de las reacciones adversas y los eventos adversos producidos con ocasión del estudio. Asimismo, serán responsables del cumplimiento de las normas sobre farmacovigilancia y tecnovigilancia conforme al reglamento.

Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud regulará las materias de las que trata el presente artículo.

Artículo 111 C.- El paciente sujeto de ensayo clínico tendrá derecho a que, una vez terminado éste, el titular de la autorización especial para uso provisional con fines de investigación y, con posterioridad en su caso, el titular del registro sanitario del producto sanitario de que se trate, le otorgue sin costo para el paciente la continuidad del tratamiento por todo el tiempo que persista su utilidad terapéutica, conforme al protocolo de investigación respectivo.

Esta obligación afectará al titular del registro sanitario, aun cuando no haya sido el titular de la autorización provisional o haya adquirido con posterioridad el registro sanitario.

Artículo 111 D.- Todo centro donde se realice investigación de productos farmacéuticos y elementos de uso médico en seres humanos deberá estar acreditado por el Instituto de Salud Pública, conforme a los estándares, exigencias y procedimientos que establezca el reglamento.

La misma autoridad será competente para la fiscalización del cumplimiento de los protocolos de investigación, de los consentimientos informados, de las buenas prácticas clínicas, de las notificaciones de reacciones adversas y de eventos adversos y, en general, del cumplimiento de la normativa relacionada con esta materia.

El Instituto de Salud Pública tendrá libre acceso a la información relacionada con la investigación. Toda obligación de reserva contemplada en protocolos, o convenciones y documentos en general, será inoponible a esa autoridad. Toda disposición en contravención a esta ley contenida en los referidos protocolos, convenciones y documentos es nula, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 89 y 91, letra b), de la ley N°19.039, de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 111 E.- Los titulares de las autorizaciones para uso provisional con fines de investigación serán responsables por los daños que causen con ocasión

de la investigación, aunque estos se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica, existentes en el momento de producirse los daños.

Asimismo, acreditado el daño, se presumirá que éste se ha producido con ocasión de la investigación.

La acción para perseguir esta responsabilidad prescribirá en el plazo de diez años, contado desde la manifestación del daño.

Artículo 111 F.- Será obligación de los titulares de las autorizaciones especiales para uso provisional para fines de investigación de productos farmacéuticos y, o elementos de uso médico contar con una póliza de seguro por responsabilidad civil, conforme al reglamento que se dicte a través del Ministerio de Salud.

A través de un decreto supremo del Ministerio de Salud se establecerá la clase de los elementos de uso médico para cuya investigación será obligatoria la presentación de pólizas de seguro.

Artículo 111 G.- Las infracciones de lo dispuesto en el presente Título serán sancionadas conforme a las normas del Libro Décimo de este Código y a las contenidas en la ley N°20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.

TÍTULO VI
DE LA RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS SANITARIOS DEFECTUOSOS

Artículo 111 H.- Se entenderá por productos sanitarios los regulados en los Títulos I, II y IV de este Libro.

Se entenderá por producto sanitario defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad suficiente, teniendo en cuenta todas las circunstancias ligadas al producto y, especialmente, su presentación y el uso razonablemente previsible.

Asimismo, un producto es defectuoso si no ofrece la misma seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie.

Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma perfeccionada.

Artículo 111 I.- Todo daño causado por el uso de un producto sanitario defectuoso dará lugar a las responsabilidades civiles y penales, según corresponda.

Serán responsables de los daños los titulares de los registros o autorizaciones, los fabricantes y los importadores, según corresponda. Las personas responsables del daño lo serán solidariamente ante los perjudicados. El que hubiere respondido ante el perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la producción del daño.

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, responderá en su caso, conforme a las reglas establecidas en el Título III de la ley N°19.966, que establece un régimen de garantías en salud, pudiendo siempre repetir contra las personas señaladas en el inciso anterior. El plazo de prescripción para ejercer esta acción será de cinco años.

Artículo 111 J.- El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.

En los ensayos clínicos, acreditado el daño, se presumirá que éste se ha producido con ocasión de la investigación.

Artículo 111 K.- El demandado no podrá eximirse de responsabilidad alegando que los daños ocasionados por un producto sanitario defectuoso se originan de hechos o circunstancias que no se previeron según el estado de los conocimientos científicos o técnicos existentes en el momento de su puesta en circulación o uso.

Artículo 111 L.- La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en este Título prescribirá a los cinco años contados desde la manifestación del daño, ya sea por el defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó. La acción de repetición del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá en el plazo de dos años contado desde el día de su pago.

La acción para el resarcimiento de los daños producidos con ocasión de un ensayo clínico prescribirá en el plazo establecido en el artículo 111 E.

Artículo 111 M.- Los fabricantes e importadores de los productos sanitarios deberán contar con un seguro, aval o garantía financiera equivalente, para responder de los daños sobre la salud derivados de problemas de seguridad de los mismos, en los términos que establezca el reglamento.

Artículo 111 N.- El ejercicio de las acciones jurisdiccionales para la reparación de los daños de que trata este Título se regirá por lo dispuesto en el Párrafo II del Título III de la ley N°19.966.

Para estos efectos, forman parte de la Red Asistencial de la que trata el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, los prestadores que hayan celebrado un convenio con el Fondo Nacional de Salud para el otorgamiento de prestaciones cuya cobertura se encuentra a su cargo.

Asimismo, las reclamaciones por productos defectuosos o daños causados con ocasión de un ensayo clínico se presentarán ante la entidad establecida en el artículo 44 de la ley N°19.966 y se regirán por el procedimiento establecido en dicha norma.”.

Artículo 35.- Agrégase en el artículo 13 de la ley N°20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el siguiente literal e):

“e) Al Instituto de Salud Pública, en el ejercicio de sus facultades.”.

Artículo 36.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°18.469 y N°18.933, de la siguiente forma:

1) Intercálase en su artículo 50, el siguiente literal e), nuevo, pasando el actual a ser f) y así sucesivamente:

“e) Asegurar el otorgamiento de las prestaciones de diagnósticos y tratamientos de alto costo, en la forma y condiciones establecidas en la ley, y administrar operativamente los recursos contemplados para el financiamiento de dichos diagnósticos y tratamientos.”.

2) Incorpórase el siguiente artículo 50 bis:

“Artículo 50 bis.- El Fondo Nacional de Salud deberá informar a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, de las materias y en las condiciones que establezca la ley.

Será de responsabilidad del director del Fondo Nacional de Salud proporcionar la referida información.

Asimismo, el Fondo Nacional de Salud deberá implementar y administrar el sistema de información para el otorgamiento de las prestaciones incorporadas al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, de acuerdo a la ley respectiva.”.

3) Agrégase en su artículo 70 el siguiente literal e):

“e) Proveer los productos sanitarios necesarios para el otorgamiento de las prestaciones cubiertas por el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Asimismo, podrá proveer los productos sanitarios para tratamientos de alto costo no cubiertos por dicho Sistema, para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y para las Instituciones de Salud Previsional, a solicitud de los organismos respectivos, previo pago anticipado de, al menos, los gastos que irrogue su importación y, o registro. Para los efectos de esta letra, la Central podrá registrar, importar, adquirir, almacenar, distribuir, transportar, arrendar y vender esos productos.”.

4) Modifícase en el artículo 107, su inciso segundo, en el siguiente sentido:

- a) Elimínase la conjunción “y”, la segunda vez que aparece.
- b) Agrégase, luego de la palabra “Salud”, la frase “y al Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.
- c) Incorpórase el siguiente inciso final:

“De la misma manera, le corresponde el control y supervigilancia del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Para estos efectos, podrá regular, fiscalizar y resolver las controversias respecto de prestadores, seguros, fondos e instituciones que participen de todos los sistemas previsionales de salud, incluyendo los de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.”.

5) Reemplázase el nombre del párrafo 2° del Título III del Capítulo VII del Libro I, por el siguiente “De la Supervigilancia y Control de las Garantías Explícitas en Salud y del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.

6) Modificase su artículo 115, en el siguiente sentido:

- a) Intercálase, en el inciso primero, antes de los dos puntos, la expresión “y el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.
- b) Añádese, en el número 1, a continuación de la palabra “Salud”, la expresión “y de las prestaciones del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.
- c) Incorpórase, en el número 2, a continuación de la expresión “Salud”, la frase “y el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.
- d) Intercálase el siguiente número 5, nuevo, pasando el actual a ser 6, y así sucesivamente:

“5.- Dictar las instrucciones de carácter general al Fondo Nacional de Salud, instituciones de salud previsionales, prestadores e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, con el objeto de facilitar la aplicación del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y el acceso a sus beneficiarios; realizar la correcta interpretación de sus normas, y fiscalizar su cumplimiento, salvo en las materias propias reguladas en el Código Sanitario;”.

- e) Intercálase, en el actual número 5, que pasa a ser 6, a continuación de la expresión “en Salud”, las dos veces que aparece, la frase “y el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.
- f) Agrégase, a continuación del actual número 7, que pasa a ser 8, el siguiente número 9, nuevo:

“9.- Requerir de los prestadores, tanto públicos como privados, del Fondo Nacional de Salud, de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile y en general, de cualquier institución pública y/o privada la información que acredite el cumplimiento del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, sobre oportunidad y calidad de las prestaciones y beneficios de salud que se otorguen a los beneficiarios, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponder a otros organismos. Esta facultad se extenderá al otorgamiento de las prestaciones no contempladas pero asociadas al Sistema, efectuadas en la Red de Prestadores aprobada por el Ministerio de Salud;”.

- g) Agrégase, en el actual número 9, que pasa a ser 11, a continuación de la palabra “salud”, la segunda vez que aparece, la expresión “así como con el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.

7) Añádese en el inciso primero de su artículo 116, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y en el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo”.

8) Incorpórase en el literal a) de su artículo 189, el siguiente inciso final:

“Asimismo, las instituciones de salud previsual deberán informar a sus afiliados respecto de la existencia y cobertura del Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, y, cuando proceda, transferir al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo los recursos que por concepto de cobertura adicional de enfermedades catastróficas corresponda otorgar. Esta última materia deberá ser reglada mediante instrucciones de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Las normas de esta ley regirán a contar de la entrada en vigencia del decreto a que se refiere el artículo 5°, según lo señalado en el inciso siguiente. No obstante, a contar de la fecha de publicación de esta ley, podrán dictarse los decretos y reglamentos a que ella se refiere.

El primer decreto que establezca los tratamientos de alto costo que se incorporan al sistema que regula esta ley podrá dictarse una vez publicados los reglamentos

señalados en los artículos 6° y 13, inciso segundo, sin que le sea aplicable el procedimiento contenido en los artículos 7°, 8° y 9°, inciso primero, ni el plazo fijado en el inciso primero del artículo 10. Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016.

Los reglamentos señalados en los artículos 6° y 13 deberán dictarse dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de esta ley.

El segundo decreto que establezca los tratamientos de alto costo será dictado antes del 31 de diciembre del año 2016, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2017 y regirá hasta el 31 de diciembre de 2017. Para la elaboración de este decreto será necesario cumplir todos los procedimientos previstos en esta ley, con excepción del establecido en los artículos 7°, 8° y 9°, inciso primero, para los tratamientos incluidos en el primer decreto.

El tercer decreto que establezca los tratamientos de alto costo será dictado antes del 31 de diciembre del año 2017, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018 y regirá hasta el 30 de junio de 2019. Para la elaboración de este decreto será necesario cumplir todos los procedimientos previstos en esta ley.

El cuarto decreto que fije estos mismos tratamientos y los sucesivos serán dictados junto al decreto que establezca las Garantías Explícitas en Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, inciso segundo, de la ley N°19.966, y su vigencia se extenderá por el término señalado en el artículo 14. Para la elaboración del tercer decreto y los sucesivos será necesario cumplir todos los procedimientos previstos en esta ley.

La Garantía Explícita de Calidad será exigible cuando entre en vigencia, conforme a la ley N°19.966.

Los integrantes de la primera Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control del Sistema, a que se refiere el artículo 22, que se indican a continuación, durarán en sus funciones dos años: un representante de asociaciones de pacientes, uno de asociaciones científicas, un académico de facultades de medicina de una institución de educación superior acreditada institucionalmente y dos expertos del área de la salud designados por el Ministro de Salud. Los demás integrantes de dicha Comisión durarán cuatro años en sus funciones.

Artículo segundo.- El Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo se constituirá a más tardar en la fecha de entrada en vigencia del primer decreto señalado en el artículo 5°.

Los aportes fiscales anuales para el Fondo a que hace referencia el artículo 20 se regirán por las reglas siguientes:

- 1) A más tardar el 31 de diciembre de 2015, el aporte fiscal provendrá de recursos del Fondo Nacional de Salud y treinta mil millones de pesos del Tesoro Público.
- 2) Durante el año 2016, la Ley de Presupuestos aportará sesenta mil millones de pesos.
- 3) En el tercer, cuarto y quinto año de vigencia del Fondo, la Ley de Presupuestos aportará anualmente cien mil millones de pesos.
- 4) A contar del cuarto año de vigencia se aplicará lo dispuesto en la letra a) del artículo 20 y se otorgará el primer reajuste establecido en dicho artículo.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos contemplados en la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con estos recursos. Para los años siguientes, el financiamiento se realizará con cargo a los recursos que la Ley de Presupuestos asigne para estos fines.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 1 de junio de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Jorge Insunza Gregorio de las Heras, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Transcribo para su conocimiento Ley N° 20.850 de 01-06-2015.- Saluda atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

(IdDO 911594)

PROMULGA EL ACUERDO RELATIVO A LA REVISIÓN SUSTANTIVA DEL ACUERDO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL PROYECTO: “PROGRAMA DE FOMENTO DE CAPACIDADES EN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES EN CHILE”

Núm. 5.- Santiago, 26 de enero de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y la ley N° 18.158.

Considerando:

Que con fechas 29 de diciembre de 2014 y 22 de enero de 2015, se suscribió, en Santiago, entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Acuerdo relativo a la Revisión Sustantiva del Acuerdo sobre el Proyecto: “Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones en Chile (Low Emission Capacity Building Programme; LECB-Chile)”, el que fuera publicado en el Diario Oficial el 6 de febrero de 2013.

Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, suscrito con las Naciones Unidas y diversas Agencias Especializadas de esa Organización, y del Acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Especial, ambos publicados en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1960,

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo sobre la Revisión Sustantiva del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: “Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones en Chile (Low Emission Capacity Building Programme; LECB-Chile)”, suscrito en Santiago, con fechas 29 de diciembre de 2014 y 22 de enero de 2015; cúmplase y publíquese en la forma establecida en la ley N° 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Herald Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.- Gustavo Oyares Ossandón, Embajador, Director General Administrativo.

(IdDO 911595)

PROMULGA LA MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 15 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - AUSTRALIA

Núm. 9.- Santiago, 10 de febrero de 2015.

Vistos:

Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 11 de diciembre de 2014, el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia suscribieron, en Santiago, Chile, la Modificación del Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio Chile - Australia.

Que dicha Modificación fue suscrita en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y de Australia, sus Anexos y Cartas Complementarias, suscrito el 30 de julio de 2008, y publicado en el Diario Oficial de 6 de marzo de 2009.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto de la referida Modificación y, en consecuencia, entró en vigor internacional el 6 de enero de 2015.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase la Modificación del Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio Chile - Australia, suscrita entre las mismas Partes, en Santiago, Chile, el 11 de diciembre de 2014; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Edgardo Riveros Marín, Ministro de Relaciones Exteriores (S).

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General Administrativo.

TRADUCCIÓN
I-493/14

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – AUSTRALIA
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 15 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE - AUSTRALIA

Modificación de las Listas de Australia adjuntas al Capítulo 15 (Contratación Pública), Anexo 15 A, Sección 1 (Entidades del Gobierno Central) y Sección 3 (Otras Entidades Cubiertas) del Tratado de Libre Comercio Chile - Australia (“TLC”), suscrito en Canberra el 30 de julio de 2008 y que entró en vigor el 6 de marzo de 2009.

En virtud de un intercambio de cartas entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia de fecha 9 de diciembre de 2012, y conforme al Artículo 23.3 (Modificaciones), las Partes del TLC por este acto acuerdan las modificaciones al TLC que se establecen en el Anexo 1.

En conformidad con el Artículo 23.3 2) del TLC, este Instrumento y el Anexo 1 del presente constituyen parte integrante del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia.

Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que Chile notifique a Australia que ha completado los procedimientos legales necesarios.

Australia confirma que completó sus procedimientos legales necesarios.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, suscriben el presente Instrumento.

Hecho en Santiago, Chile, en dos ejemplares, a once de diciembre de 2014.

Por el Gobierno de la República de Chile.- Firma ilegible, Herald Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores.- Por el Gobierno de Australia.- Firma ilegible, Andrew Robb AO MP, Ministro de Comercio e Inversión.

ANEXO 1

Modificaciones de las Listas de Australia adjuntas al Capítulo 15 (Contratación Pública), Anexo 15 A, Sección 1 (Entidades del Gobierno Central) y Sección 3 (Otras Entidades Cubiertas) del Tratado de Libre Comercio Chile - Australia (“TLC”).

A. Entidades Adicionales que deben agregarse a la cobertura de acceso al mercado de Australia en conformidad con el Anexo 15A, Sección 1 (Entidades del Gobierno Central) del TLC

1. Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI);

2. Australian Institute of Family Studies;

3. Australian National Preventative Health Agency;

4. Australian Organ and Tissue Donation and Transplantation Authority;

5. Cancer Australia;

6. Private Health Insurance Ombudsman;

7. National Health and Medical Research Council (NHMRC);

8. Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA);

9. Australian Skills Quality Authority;

10. Tertiary Education Quality and Standards Agency;

11. National Water Commission; y

12. Fair Work Building and Construction.
- B. Entidades Adicionales que deben agregarse a la cobertura de acceso al mercado de Australia en conformidad con el Anexo 15A, Sección 3 (Otras Entidades Cubiertas)
1. Murray-Darling Basin Authority; y

2. Independent Hospital Pricing Authority.

Traducido por: Gabriela Herrera Cruz - Resolución N° 14 de 25/01/1988. Santiago, Chile, a 29 de diciembre de 2014.- Alejandra Vergara Zapata, Traductora.

(IdDO 911043)

DELEGA FACULTADES EN EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

(Resolución)

Núm. 1.455 exenta.- Santiago, 19 de mayo de 2015.

Vistos:

La ley N° 16.436; los artículos 24 y 41 del DFL N° 1/19.653, de 2000, de la Secretaría General de la Presidencia, aprobatorio del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el DFL N° 53, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que crea la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y establece su Estatuto Orgánico; la Ley N° 16.592, de 1966, que crea la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado; el DFL N° 82, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Antártico Chileno; el DFL N° 161, de 1978, de Relaciones Exteriores, aprobatorio del Estatuto Orgánico de esta Secretaría de Estado, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón,

Resuelvo:

Delégase en el Director General Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en quien lo subrogue legalmente, la facultad de autenticar, en carácter de Ministro de Fe, las Declaraciones de Intereses del personal de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y del Instituto Antártico Chileno.

Regístrese, comuníquese y publíquese.- Edgardo Riveros Marín, Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, Embajador, Director General Administrativo.

Ministerio de Hacienda

Tesorería General de la República

(Resoluciones)

(IdDO 911596)

ASIGNA A FUNCIONARIOS QUE INDICA EN CARGO DE DIRECTOR REGIONAL TESORERO SUBROGANTE

Núm. 608.- Santiago, 28 de abril de 2015.

Vistos:

El Art. 5° del DFL N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, el DH N° 1.257, de 2002, el Art. 21° N° 1 de la ley N° 19.738 y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y el decreto N° 1.600, de 13 de octubre de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado con fecha 24 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial, dicto la siguiente,

Resolución:

Asígnase a los siguientes funcionarios, a contar de la fecha que se indica, para desempeñar en calidad de subrogante, la función que se señala:

Nombre

RUT

Ubicación

Calidad jurídica

Estamento

Cargo

Grado

Fecha inicio

Función

: Osvaldo Miguel Brahm Arce

: 6349582-4

: Décimo Cuarta Región - Regional Valdivia - Unidad Operativa de Cobro 2

: Planta

: Profesional

: Profesional

: 8 EU

: 27/04/2015

: Director Regional Tesorero Subrogante.

Nombre

RUT

Ubicación

Calidad jurídica

Estamento

Cargo

Grado

Fecha inicio

Función

: José Luis Alarcón Badilla

: 10117526-K

: Décimo Cuarta Región - Regional Valdivia - Operaciones

: Suplente

: Profesional

: Profesional

: 10 EU

: 27/04/2015

: Director Regional Tesorero Subrogante.

Nombre

RUT

Ubicación

Calidad jurídica

Estamento

Cargo

Grado

Fecha inicio

Función

: Rosa Fernanda Gomila Álamos

: 7687887-0

: Décimo Cuarta Región - Regional Valdivia - Unidad Operativa de Cobro 1

: Contrata

: Profesional

: Profesional

: 11 EU

: 27/04/2015

: Directora Regional Tesorera Subrogante.

Déjese sin efecto resolución interna N° 1.333 del 18/04/2013.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República.

(IdDO 910958)

ASIGNA A DOÑA PATRICIA EUGENIA SEGOVIA RAMÍREZ LA FUNCIÓN DE TESORERA PROVINCIAL SUBROGANTE

Núm. 715.- Santiago, 18 de mayo de 2015.

Vistos:

El Art. 5° del DFL N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el DH N° 1.257, de 2002; el Art. 21° N° 1 de la ley N° 19.738 y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República y el decreto N° 1.600, de 13 de octubre de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado con fecha 24 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial, dicto la siguiente,

Resolución:

Asígnase, al siguiente funcionario, a contar de la fecha que se indica, para desempeñar en calidad de subrogante, la función que se señala:

Nombre	:	Patricia Eugenia Segovia Ramírez
RUT	:	15.128.950-9
Ubicación	:	Sexta Región - Provincial de San Fernando - Staff
Calidad jurídica	:	Contrata
Estamento	:	Profesional
Cargo	:	Profesional
Grado	:	8 EU
Fecha Inicio	:	19/05/2015
Función	:	Tesorera Provincial Subrogante.

Déjese sin efecto resolución interna N° 4.310 del 07/12/2012.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República.

(IdDO 910959)

ASIGNA A FUNCIONARIOS QUE INDICA LA FUNCIÓN DE TESORERO PROVINCIAL SUBROGANTE

Núm. 716.- Santiago, 18 de mayo de 2015.

Vistos:

El Art. 5° del DFL N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el DH N° 1.257, de 2002; el Art. 21° N° 1 de la ley N° 19.738 y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y el decreto N° 1.600, de 13 de octubre de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado con fecha 24 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial, dicto la siguiente,

Resolución:

Asígnase a los siguientes funcionarios, a contar de la fecha que se indica, para desempeñar en calidad de subrogante, la función que se señala:

Nombre	:	Jorge Olmos de Aguilera Meléndez
RUT	:	6.7886.42-9
Ubicación	:	Quinta Región - Provincial de San Felipe Administración y Finanzas
Calidad jurídica	:	Planta
Estamento	:	Directivo
Cargo	:	Jefe de Sección
Grado	:	11 EU
Fecha Inicio	:	13/05/2015
Función	:	Tesorero Provincial Subrogante.

Nombre	:	Claudio Víctor Caneo Marfull
RUT	:	9.468.433-1
Ubicación	:	Quinta Región - Provincial de San Felipe - Operaciones
Calidad jurídica	:	Suplente
Estamento	:	Directivo
Cargo	:	Jefe de Oficina
Grado	:	12 EU
Fecha Inicio	:	13/05/2015
Función	:	Tesorero Provincial Subrogante.

Nombre	:	Claudia Andrea Nahuas Vivanco
RUT	:	13.365.289-2
Ubicación	:	Quinta Región - Provincial de San Felipe - Unidad Operativa de Cobro 1
Calidad jurídica	:	Contrata
Estamento	:	Profesional
Cargo	:	Profesional
Grado	:	12 EU
Fecha Inicio	:	13/05/2015
Función	:	Tesorera Provincial Subrogante.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República.

(IdDO 910963)

ASIGNA A FUNCIONARIOS QUE INDICA LA FUNCIÓN DE DIRECTOR REGIONAL TESORERO SUBROGANTE

Núm. 721.- Santiago, 18 de Mayo de 2015.

Vistos:

El Art. 5° del DFL N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; el DH N° 1.257, de 2002; el Art. 21° N° 1 de la ley N° 19.738 y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y el decreto N° 1.600, de 13 de octubre de 2014, del Ministerio de Hacienda, publicado con fecha 24 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial, dicto la siguiente,

Resolución:

Asígnase a los siguientes funcionarios, a contar de la fecha que se indica, para desempeñar en calidad de subrogante, la función que se señala:

Nombre	:	Eugenio Alejandro Guzmán Fredes
RUT	:	5.110.012-3
Ubicación	:	Región Metropolitana - Regional Metropolitana - Staff
Calidad jurídica	:	Contrata
Estamento	:	Profesional
Cargo	:	Profesional
Grado	:	5 EU
Fecha inicio	:	27/04/2015
Función	:	Director Regional Tesorero Subrogante.

Nombre	:	Mario Fernando Fuentes Espinoza
RUT	:	10.064.112-7
Ubicación	:	Región Metropolitana - Regional Metropolitana Operaciones

Calidad jurídica	:	Contrata
Estamento	:	Profesional
Cargo	:	Profesional
Grado	:	8 EU
Fecha inicio	:	27/04/2015
Función	:	Director Regional Tesorero Subrogante.
Nombre	:	Félix Andrés Santander Meersohn
RUT	:	9.978.588-8
Ubicación	:	Región Metropolitana - Regional Metropolitana – Staff
Calidad jurídica	:	Contrata
Estamento	:	Profesional
Cargo	:	Profesional
Grado	:	9 EU
Fecha inicio	:	27/04/2015
Función	:	Director Regional Tesorero Subrogante.

Déjase sin efecto resolución interna Nº 105 del 24/01/2014.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción

(IdDO 911589)
CREA PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN URBANA Y PRODUCTIVA SUSTENTABLES
(Resolución)

Núm. 871.- Santiago, 29 de mayo de 2015.

Vistos:

- El Acuerdo de Consejo Nº 2.869, de 2015, adoptado por el Honorable Consejo de esta Corporación en su Sesión de 5 de mayo de 2015, por la cual aprobó la creación de “Programa de Reconstrucción Urbana y Productiva Sustentables”.
- Lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en orden a que las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se llevarán a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva correspondiente.
- Las facultades que me otorga el Reglamento General de la Corporación y lo establecido en la resolución Nº 1.600 de 1992, de la Contraloría General de la República,

Resuelvo:

1º Ejecútase el Acuerdo de Consejo Nº 2.869, de 2015, adoptado por el Honorable Consejo de esta Corporación en su sesión de 5 de mayo de 2015, por la cual aprobó la creación de “Programa de Reconstrucción Urbana y Productiva Sustentables”.

2º Apruébase el Reglamento que regirá las condiciones en las cuales Corfo financiará el “Programa de Reconstrucción Urbana y Productiva Sustentables”.

1. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

El objetivo del Programa es diseñar de manera participativa Planes Estratégicos de reconstrucción urbana y productiva sustentables para áreas territoriales o sectores productivos afectados por una catástrofe natural.

Sus objetivos específicos son:

- Reconstruir el capital social de los actores institucionales del territorio a través del diseño participativo de un Plan de Reconstrucción.
- Diseñar un Plan de Reconstrucción que considere de manera integrada tanto la componente urbana como de base productiva, con una mirada de sustentabilidad sistémica y de largo plazo.
- Identificar y proponer la integración de elementos innovadores en el Plan de Reconstrucción, tanto en el diseño urbano y modelo de gestión, como en elementos tales como materialidad, uso de energía solar y eficiencia hídrica, que apoyen la sustentabilidad de largo plazo del plan y que permitan desarrollar nuevas actividades económicas en el territorio y/o mejorar las existentes, apoyando la diversificación productiva y los procesos de sofisticación económica.

2. DURACIÓN

Los proyectos tendrán una duración de 24 meses, prorrogables en casos debidamente fundados, hasta por tres meses, por el Gerente de Desarrollo Competitivo.

La duración del proyecto se contará desde la notificación a los Agentes Operadores Intermediarios de la resolución que ejecutó el acuerdo que aprobó el proyecto y dispuso la transferencia de sus recursos. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la rendición de cuentas, se aceptarán gastos imputados al subsidio otorgado, desde la fecha de adopción del Acuerdo del Comité de Asignación de Fondos - CAF, siempre y cuando las actividades que los originen hayan sido incluidas en la postulación.

3. MODELO DE ADMINISTRACIÓN

La administración de este Programa se encuentra externalizada, a través de entidades públicas o privadas, denominadas Agentes Operadores Intermediarios (AOI). Ellos, en conformidad a este reglamento, son los habilitados para postular y administrar los proyectos; además, son los responsables de velar por el cumplimiento de las actividades y objetivos del Programa, así como de las obligaciones financieras.

Los requisitos para ser Agente Operador Intermediario, su incorporación, mantención, pagos, obligación y causales de pérdida de su calidad, se encuentran regulados en su Reglamento, disponible en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl.

Cuando circunstancias excepcionales así lo ameriten, el Comité de Asignación de Fondos - CAF podrá resolver que uno o más de estos proyectos sean administrados directamente por Corfo, determinando los procedimientos respectivos.

La operación de los Proyectos deberá ajustarse a las instrucciones que imparta la Gerencia de Desarrollo Competitivo de Corfo en relación a los procedimientos.

4. FINANCIAMIENTO

El monto del financiamiento para cada proyecto será de hasta \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos).

Estos recursos serán destinados a la ejecución de las actividades de asistencia técnica, capacitación y consultorías incluidas en el proyecto, a las actividades de difusión y promoción del proyecto y a los pagos de su equipo técnico.

No se podrán cofinanciar a través de este instrumento gastos de inversión del proyecto, salvo aquellos activos imprescindibles para la operación de su equipo técnico.

5. EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La postulación, evaluación, supervisión y administración de los Proyectos estará entregada a los Agentes Operadores Intermediarios, a los que Corfo pagará hasta un 15% del financiamiento entregado, con un tope de \$15.000.000.- (quince millones de pesos).

6. ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Será requisito previo para la postulación de uno de estos proyectos, que se haya declarado por la autoridad pertinente, a través del acto administrativo correspondiente, en los 6 meses inmediatamente anteriores a la postulación, un estado de excepción, de catástrofe o de emergencia para el territorio o sector a que se refiere el Plan de Reconstrucción.

La aprobación de un proyecto y la asignación de sus recursos le corresponderán al Comité de Asignación de Fondos - CAF, por mayoría.

Los criterios de evaluación para la aprobación de los proyectos y sus respectivas ponderaciones serán los siguientes:

Criterio de Evaluación	Ponderación
Impacto: Se evaluará el impacto del desarrollo del proyecto en el territorio o sector económico.	40%
Calidad de la formulación y coherencia del proyecto: Se evaluará la congruencia y calidad en la formulación del proyecto, en relación a los objetivos y plazos propuestos.	40%
Propuesta económica: Se evaluará la coherencia entre el presupuesto y el plan de actividades presentado.	20%

La Evaluación se realizará de conformidad con los citados criterios, a los que se les asignará una nota de 1 a 10, donde 1 es la más baja y 10 la más alta.

No podrá ser recomendado para su asignación un proyecto que obtenga una evaluación total inferior a 7 o aquellos que en uno o más de los criterios antes señalados obtengan una calificación inferior a 6. La evaluación se realizará asignando notas de números enteros.

El Gerente de Desarrollo Competitivo tendrá facultades para ejecutar dichos acuerdos y para modificarlos en todos aquellos aspectos que no sean sustanciales.

Para estos efectos, se considerarán aspectos sustanciales el cambio del Agente Operador Intermediario, de los objetivos específicos del proyecto y/o el aumento del financiamiento total asignado al proyecto.

7. ANTICIPOS, GARANTÍAS Y RENDICIONES

El Gerente de Desarrollo Competitivo podrá autorizar anticipos a los Agentes Operadores Intermediarios hasta por un máximo de seis meses del monto aprobado para la ejecución de los Proyectos. Los anticipos a los Agentes Operadores Intermediarios Privados sólo podrán autorizarse previa entrega de una boleta de garantía, una póliza de seguro de ejecución inmediata o un depósito bancario a plazo por el total de los fondos anticipados.

El Agente Operador Intermediario deberá preparar oportuna y periódicamente los correspondientes informes y rendiciones de cuentas, conforme las instrucciones establecidas por Corfo y sin perjuicio de aquellas que imparta la Contraloría General de la República.

8. CASOS ESPECIALES

El CAF, por la unanimidad de sus miembros asistentes y mediante acuerdo debidamente fundado, podrá modificar las normas referentes a su financiamiento, transferencias a Agentes Operadores Intermediarios y duración de sus etapas, cuando algún sector económico, territorio o zona geográfica determinada o tipología de intervención así lo requiera.

9. VIGENCIA

Este reglamento entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitada la presente resolución.

Anótese, transcribase y publíquese en el Diario Oficial.- Claudio Maggi Campos, Gerente de Desarrollo Competitivo.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

(Resoluciones)

(IdDO 911588)

LLEVA A EFECTO ACUERDO DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015, RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE PERSONALIDADES REGIONALES DE LA CULTURA PARA INTEGRAR EL CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE AYSÉN, POR EL PERÍODO QUE INDICA

Núm. 995 exenta.- Valparaíso, 29 de mayo de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el decreto supremo N° 336, de 2003, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento para el nombramiento de los integrantes del Directorio, del Comité Consultivo Nacional, de los Consejos Regionales y de los Comités Consultivos Regionales del Servicio; en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y en la resolución N° 268, de 2013, del Servicio, que delega facultades que indica en la Subdirectora Nacional.

Considerando:

Estos antecedentes: el memorando N° 02UR/183 del Coordinador (S) de la Sección de Coordinación Regional del Consejo, recibido por el Departamento Jurídico con antecedentes completos con fecha 20 de mayo de 2015.

Que la Ley N° 19.891, que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dispone en su artículo 4° que son órganos del Servicio: su Directorio, el Presidente, el Subdirector Nacional, el Comité Consultivo Nacional, los Comités Consultivos Regionales y los Consejos Regionales.

Que el artículo 17 del mismo cuerpo legal y el artículo 22 del decreto supremo N° 336, de 2003, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento para el nombramiento de los integrantes del Directorio, del Comité Consultivo Nacional, de los Comités Consultivos Regionales y de los Consejos Regionales, establece que los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes estarán integrados, entre otros, por cuatro personalidades regionales de la Cultura.

Que mediante la resolución exenta N° 1.824, de 25 de abril de 2012, se llevó a efecto el Acuerdo del Directorio del Consejo, adoptado con fecha 13 de abril de 2012, en que se designan en la Región de Aysén las cuatro personalidades regionales de la Cultura que integran los respectivos Consejos Regionales de la Cultura por el período 2012-2016, período que se extiende hasta el 25 de abril de 2016, según lo establece el artículo segundo de la referida resolución exenta del Consejo, a las siguientes personas:

REGIÓN AYSÉN
Manuel Mena Larraín
Sergio Marín Ugas
Juan Mihovilovic Hernández
Arturo Rivera Altamirano

Que por resoluciones exentas N°s 1.852, de 2013; 421 y 634, ambas de 2.014, se formalizó la renuncia de don Juan Mihovilovic Hernández, don Sergio Marín Ugas y don Arturo Rivera Altamirano, respectivamente, personalidades regionales de la Cultura de la Región de Aysén.

Que para efectos de proceder a la designación de las tres personalidades de la cultura que reemplazarán a aquellos que presentaron sus renunciaciones, se verificó el procedimiento establecido en el artículo 25 del referido decreto supremo N° 336, de 2003, del Ministerio de Educación, siendo designadas por el Directorio Nacional, de una nómina elaborada por el respectivo Intendente, a propuesta de las organizaciones culturales de las provincias de la región respectiva, que tengan personalidad jurídica vigente y se encuentren inscritas en el Registro Regional al que se refiere el artículo 27 de dicha norma, previa publicación de un aviso en un diario de circulación regional convocando a estas organizaciones a efectuar las proposiciones descritas.

Que forman parte de los antecedentes de esta resolución la publicación del aviso en un diario de circulación regional referida, así como el certificado del respectivo Director Regional, donde consta el hecho de que las organizaciones culturales que realizaron sus proposiciones se encuentran inscritas en el Registro Regional respectivo.

Que este Servicio ha recibido oficio remitido por el Intendente de la Región ya señalada, en que se acompañan las respectivas nóminas de personas propuestas al Directorio para su designación como integrantes del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén que reemplazarán a aquellos que presentaron sus renunciaciones, en el cupo “personalidades regionales de la cultura”, las que fueron puestas a disposición del Directorio Nacional.

Que según consta en el certificado del Subdirector Nacional (S) de este Servicio, de fecha 27 de marzo de 2015, el Directorio Nacional, en sesión ordinaria de la misma fecha, acordó designar a las tres personalidades regionales de la cultura que integrarán el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Región de Aysén, en reemplazo de aquellos que presentaron sus renunciaciones, correspondiendo llevar a efecto dicho acuerdo por medio de resolución administrativa de la autoridad ejecutiva de este servicio.

Resolución:

Artículo primero: Llévase a efecto el acuerdo adoptado por el Directorio Nacional, en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2015, según consta del certificado del Subdirector Nacional (S) de este Servicio, de la misma fecha, en que se designó a las tres personalidades regionales de la Cultura que integrarán el Consejo Regional de la Cultura y las Artes en la Región de Aysén, en reemplazo de aquellos que presentaron sus renunciaciones, y según se detalla a continuación:

REGIÓN AYSÉN
Carina Decker Arseno
Luis Alejandro Cárcamo Vargas
Rubén Antonio Álvarez Velásquez

Artículo segundo: Se hace presente que la designación realizada en el artículo precedente tendrá efecto a contar de la total tramitación de la presente resolución y hasta el 25 de abril de 2016.

Artículo tercero: Cúmplase por las personas designadas en el artículo primero con las normas de probidad aplicables al cargo respectivo.

Artículo cuarto: Vélese por la Sección de Gestión Regional de este Servicio y por la respectiva Dirección Regional el fiel cumplimiento de lo ordenado en el artículo precedente.

Artículo quinto: Adóptense por la Sección Administrativa y Documental las medidas conducentes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Artículo sexto: Notifíquese, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por la Sección Administrativa y Documental, lo resuelto en esta resolución, a las personas y entidades individualizadas en la distribución, vía carta certificada, que contenga una copia de esta resolución en los domicilios indicados en la distribución de la misma.

Artículo séptimo: Publíquese, una vez tramitada, la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la Sección Administrativa y Documental, con la tipología “Integraciones de órganos colegiados”, en la categoría “Actos con Efectos sobre Terceros”, de la Sección “Actos y resoluciones”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo N° 51° de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por la Sección Administrativa y Documental, la mención de los domicilios de las personas naturales que contenga esta resolución, para el solo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Lilia Concha Carreño, Subdirectora Nacional, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

(IdDO 911587)

FORMALIZA RENUNCIA Y DESIGNA INTEGRANTE DE CONSEJERO DEL CONSEJO DE FOMENTO A LA MÚSICA NACIONAL

Núm. 1.011 exenta.- Valparaíso, 1 de junio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°19.928 sobre Fomento de la Música Nacional y su reglamento; en el decreto supremo N°187, de 2004, del Ministerio de Educación que reglamenta el Fondo de la Música Nacional y en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que, por memorando interno N° 05-V/546, de la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, recibido por el Departamento Jurídico con antecedentes completos con fecha 10 de febrero de 2015, se solicita la formalización de la renuncia presentada por consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional, acompañando para tal efecto copia de la carta de renuncia de fecha 19 de diciembre de 2014 y correos electrónicos solicitando el domicilio del consejero.

Que, a través del memorándum interno 05-S/1324 de la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, recibido por el Departamento Jurídico con fecha 29 de abril de 2015, se solicita la confección de la resolución exenta que designe como integrante del Consejo de Fomento de la Música Nacional, a don René Calderón Hermosilla en lugar del renunciado consejero don Patricio Salazar Álvarez, acompañando para tal efecto: Formulario de Propuesta de Miembro del Consejo de Fomento de la Música Nacional de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD); Currículum artístico del nuevo consejero; fotocopia de cédula de identidad; carta de aceptación al cargo de consejero de René Calderón Hermosilla y Certificado de la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento de la Música Nacional de fecha 22 de abril de 2015.

Que, la Ley N° 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena, creó al interior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo de Fomento de la Música Nacional con el objeto de apoyar, estimular, promover y difundir la labor de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la identidad cultural.

Que, el artículo 4° de la ley N°19.928, dispone que el Consejo de Fomento de la Música Nacional estará compuesto, entre otros, por un autor o compositor y un intérprete o ejecutante de reconocida trayectoria en el género de la música popular, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, los cuales serán nombrados mediante una resolución firmada por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Que, en resolución exenta N°2.536 de 2014, de este Servicio, fue nombrado integrante del Consejo de Fomento de la Música Nacional, don Patricio Salazar Álvarez, de acuerdo a la designación realizada por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), como representante del género de la música popular.

Que, con fecha 19 de diciembre de 2014 el consejero antes señalado presentó su renuncia irrevocable, través de una carta dirigida a la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Que, con fecha 13 de abril de 2015 se dictó la resolución N°786 de este Servicio, que formaliza la renuncia de don Patricio Salazar Álvarez como miembro del Consejo de Fomento de la Música Nacional, la que por un error en su articulado no fue publicada en el Diario Oficial.

Que, según dispone el artículo 4° de la Ley N° 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena, si vacara alguno de los cargos de Consejero del Consejo de Fomento de la Música Nacional, el reemplazante será designado por quien corresponda.

Que, según consta en el certificado de la Secretaría del Fondo, de fecha 22 de abril de 2015, el señor René Calderón Hermosilla, fue designado como Consejero de la Música, por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, como entidad nacional de carácter más representativa en el género de la música popular.

Que, en virtud de lo anterior, es necesaria la dictación del respectivo acto administrativo.

Resolución:

Artículo primero: Formalízase la renuncia de don Patricio Salazar Álvarez, como integrante del Consejo de Fomento de la Música Nacional, de este Servicio, designado para tal efecto por la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD), en su calidad de entidad de carácter nacional más representativa que agrupa a los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes en el género de la música popular, haciéndose efectiva a contar del día 19 de diciembre de 2014.

Artículo segundo: Formalízase la designación de don René Calderón Hermosilla, cédula de Identidad N°8.431.690-3, como integrante del Consejo de Fomento de la Música Nacional, en virtud de la propuesta realizada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, como entidad de carácter nacional más representativa de la música popular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° numeral 4) de la Ley 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena, quien asume en virtud de esta designación, por el periodo legal de dos años contados desde la dictación de la presente resolución.

Artículo tercero: Déjese sin efecto la resolución exenta N°786 de 13 de abril de 2015, sin tramitar.

Artículo cuarto: Adóptense por la Secretaría Administrativa y Documental, las medidas conducentes a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración Pública.

Artículo quinto: Notifíquese, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por

la Secretaría Administrativa y Documental, lo resuelto en esta resolución, a la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD), a don Patricio Salazar Álvarez y a don René Calderón Hermosilla, vía carta certificada que contenga una copia de esta resolución, en los domicilios que constan en la distribución del presente acto administrativo.

Artículo sexto: Adóptense por la Secretaría Administrativa y Documental de este Servicio, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, tanto a los originales de las resoluciones exentas N°s 2.536, de 2014, y 786 de 2015, ambas de este Servicio, como a todas sus copias, hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio.

Artículo séptimo: Una vez que se encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la Secretaría Administrativa y Documental, en la Tipología “Integraciones de Órganos Colegiados”, categoría “Actos con Efecto sobre Terceros”, en la sección “Actos y Resoluciones”; y, además, por el Departamento Jurídico, en la categoría “Actos y documentos publicados en el Diario Oficial” de la sección “Marco Normativo”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51° de su Reglamento. Asimismo y en cumplimiento de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por la Secretaría Administrativa y Documental la mención a la Cédula Nacional de Identidad del artículo segundo y los domicilios señalados en la distribución del presente acto administrativo, para el solo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Ernesto Ottone Ramírez, Ministro Presidente Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo de Calificación Cinematográfica

(Resoluciones)

(IdDO 910973)

DESIGNA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Núm. 3.236 exenta.- Santiago, 20 de abril de 2015.

Considerando:

1° Que, conforme lo dispone el artículo 4° letra c) de la Ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, el Consejo de Calificación está integrado, entre otros, por seis académicos designados por el H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. El mismo artículo señala que los miembros del Consejo de Calificación Cinematográfica durarán cuatro años en sus funciones.

2° Que, por resolución exenta N° 1.425, de fecha 22 de marzo de 2011, del Ministerio de Educación, se designó por cuatro años a la académica Sra. Ana Cecilia Gavilanes Bravo, como Consejera, en representación del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

3° Que, atendido el hecho que la Consejera antes señalada cumple su período el 10 de enero de 2015, se despachó el oficio Ord. N° 1922, de 18 de diciembre de 2014, al Sr. Presidente del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a fin de designar un nuevo representante para el próximo período.

4° El oficio Ord. N°30/2015, de 27 de marzo de 2015, del organismo anteriormente señalado, por el cual designa, entre otros, al académico Guillermo Muñoz Mieres, como nuevo representante ante este Consejo.

5° El oficio N° 59.901 de la Contraloría General de la República, de 23 de diciembre de 2005, por el cual, la designación de Consejeros del Consejo de Calificación Cinematográfica, es una materia exenta del trámite de Toma de Razón.

Visto:

Lo dispuesto en las leyes N°s. 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación y 19.846 sobre Calificación Cinematográfica; decreto supremo N° 18, del Ministerio de Educación, de 6 de enero de 2003, y la resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

Resuelvo:

Artículo primero: Integra, por el lapso de cuatro años, a contar del 20 de abril de 2015, en calidad de Consejero del Consejo de Calificación Cinematográfica, en representación del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el académico Sr. Guillermo Gregorio Muñoz Mieres, cédula nacional de identidad N° 10.283.135-7.

Artículo segundo: El nuevo integrante del Consejo de Calificación Cinematográfica, señalado en el artículo anterior, ha jurado ser hábil para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación, Presidenta del Consejo de Calificación Cinematográfica.

(IdDO 911597)

DESIGNA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Núm. 3.480 exenta.- Santiago, 28 de abril de 2015.

Considerando:

- 1° Que conforme lo dispone el artículo 4° letra c) de la Ley N° 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, el Consejo de Calificación está integrado, entre otros, por seis académicos designados por el H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. El mismo artículo señala que los miembros del Consejo de Calificación Cinematográfica durarán cuatro años en sus funciones.
- 2° Que por resolución exenta N° 1.515, de fecha 23 de marzo de 2011, del Ministerio de Educación, se designó por cuatro años a la académica Sra. Paola Lagos Labbé como Consejera, en representación del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
- 3° Que atendido el hecho que la Consejera antes señalada cumple su período el 2 de marzo de 2015, se despachó el oficio Ord. N° 1.921, de 18 de diciembre de 2014, al Sr. Presidente del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a fin de designar un nuevo representante para el próximo período.
- 4° El oficio Ord. N° 30/2015, de 27 de marzo de 2015, del organismo anteriormente señalado, por el cual designa, entre otros, al académico Francisco Zañartu Guzmán como nuevo representante ante este Consejo.
- 5° El oficio N° 59.901, de la Contraloría General de la República, de 23 de diciembre de 2005, por el cual la designación de Consejeros del Consejo de Calificación Cinematográfica es una materia exenta del trámite de Toma de Razón.

Visto:

Lo dispuesto en las leyes N°s 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación, y 19.846, sobre Calificación Cinematográfica; decreto supremo N° 18, del Ministerio de Educación, de 6 de enero de 2003, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Resuelvo:

Artículo primero: Integra, por el lapso de cuatro años, a contar del 28 de abril de 2015, en calidad de Consejero del Consejo de Calificación Cinematográfica, en representación del H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el académico Sr. Francisco Javier Zañartu Guzmán, cédula nacional de identidad N° 6.694.161-2.

Artículo segundo: El nuevo integrante del Consejo de Calificación Cinematográfica, señalado en el artículo anterior, ha jurado ser hábil para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación, Presidenta del Consejo de Calificación Cinematográfica.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 911565)

PRORROGA NOMBRAMIENTO EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/18/2015.- RM Región Metropolitana, 01/06/2015.

Vistos:

L.19.882,

Decreto:

- 1.-Prorrógase el nombramiento de Don Angelo Mauricio Montaña Espejo, RUN N° 14.400.195-8, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 12 de abril de 2015 y hasta 12 de octubre de 2015 o hasta que se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.
2. Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones en la fecha antes indicada.
3. Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-01-001, del presupuesto del servicio Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario vigente.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- Por orden del Presidente de la República, María Paulina Saball Astaburuaga.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

(IdDO 911162)

PRORROGA NOMBRAMIENTO EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/19/2015.- RM Región Metropolitana, 01/06/2015

Vistos:

L.19.882

Decreto:

- 1.- Prorrógase el nombramiento de don Iván Paulo Leonhardt Cárdenas, RUN N° 7658684-5, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 10 de abril de 2015 y hasta 10 de octubre de 2015 o hasta que se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.
- 2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones en la fecha antes indicada.

3.- Impútese el gasto que corresponda al subtítulo 21-01-001, del presupuesto del Servicio Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario vigente.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- Por orden del Presidente de la República, María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

(IdDO 911165)

PRORROGA NOMBRAMIENTO EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/20/2015.- RM Región Metropolitana, 01/06/2015

Vistos:

L.19.882

Decreto:

- 1.- Prorrógase el nombramiento de don Omar Fernando Gutiérrez Mesina, RUN N° 7910754-9, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 4 de abril de 2015 y hasta 4 de octubre de 2015 o hasta que se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.
- 2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones en la fecha antes indicada.
- 3.- Impútese el gasto que corresponda al subtítulo 21-01-001, del presupuesto del Servicio Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario vigente.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- Por orden del Presidente de la República, María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

(IdDO 911167)

PRORROGA NOMBRAMIENTO EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/21/2015.- RM Región Metropolitana, 01/06/2015

Vistos:

L.19.882

Decreto:

- 1.- Prorrógase el nombramiento de Doña Verónica Soledad Hidalgo Contreras, RUN N° 15206794-1, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 3° Escala Única de Sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 6 de abril de 2015 y hasta 6 de octubre de 2015 o hasta que se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.
- 2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones en la fecha antes indicada.

3.- Impútese el gasto que corresponda al subtítulo 21-01-001, del presupuesto del Servicio Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario vigente.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- Por orden del Presidente de la República, María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

(IdDO 911168)

PRORROGA NOMBRAMIENTO EN FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL EN EL CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, 1° NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA

Núm. TRA 272/22/2015.- RM Región Metropolitana, 01/06/2015

Vistos:

L.19.882

Decreto:

- 1.- Prorrógase el nombramiento de Don Jorge Alejandro Saffirio Espinoza, RUN N° 8301951-4, en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanización de Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo grado 4° Escala Única de Sueldos, correspondiente a la Alta Dirección Pública, 1° Nivel de la Planta de Directivos de dicho Servicio, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 3 de abril de 2015 y hasta 3 de octubre de 2015 o hasta que se resuelva el nombramiento del titular del citado Servicio.
- 2.- Por razones de buen servicio la persona indicada deberá asumir sus funciones en la fecha antes indicada.
- 3.- Impútese el gasto que corresponda al subtítulo 21-01-001, del presupuesto del Servicio Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, del año presupuestario vigente.

Anótese, tómese razón y comuníquese.- Por orden del Presidente de la República, María Paulina Saball Astaburuaga.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Resoluciones)

(IdDO 911605)

MODIFICA NORMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y DE SUS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES

Santiago, 3 de junio de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.883 exenta.

Vistos:

La resolución exenta N° 3.288, de 8 de mayo de 2015, que aprueba la Norma de Participación Ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus Secretarías Regionales Ministeriales; lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000; el D.L. N° 1.305, de 1975, que estructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el decreto supremo N° 397, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre Reglamento de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; el Instructivo N° 007, de 6 de agosto de 2014, del Gabinete de la Presidenta de la República, para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y

Que ya en vigencia la Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus Secretarías Regionales Ministeriales, se hace necesario reconocer en el texto normativo la necesidad de omitir la consulta ciudadana virtual o de efectuarla en forma simplificada, en aquellos casos de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones promovidas con carácter de urgente por razones de interés público, o en aquellos casos en que estas modificaciones contengan un alto contenido técnico y especializado.

1.- Modifícase la resolución exenta N° 3.288, de 8 de mayo de 2015, que contiene la Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de sus Secretarías Regionales Ministeriales, reemplazando sus actuales artículos 8 y 9 por los siguientes nuevos artículos 8 y 9:

ciudadana virtual en las propuestas de modificaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en virtud del interés ciudadano que éstas revisten. Para estos efectos la propuesta deberá publicarse en el sitio web institucional del MINVU, acompañada por una breve minuta que explique su lógica y contenido, en un lenguaje claro y accesible. La minuta describirá el problema o necesidad que motiva la modificación, sus objetivos, la propuesta en sí misma y los efectos esperados. Se incluirá, además, un recuadro comparado con la redacción actual y la nueva redacción que se propone.

Quando la naturaleza de la modificación de la OGUC o razones de interés público exijan una tramitación urgente, la consulta podrá omitirse consignando las razones en los considerandos de aquélla. Con todo, en estos casos y en aquéllos en que la comprensión del contenido de la modificación requiera de conocimientos técnicos o especializados, podrá realizarse una consulta simplificada en reemplazo de la regulada en el artículo 7º, la que estará dirigida a organizaciones que estén especialmente afectadas por la medida o puedan suministrar antecedentes que contribuyan a su perfeccionamiento. La consulta simplificada deberá realizarse de manera informada, pluralista y representativa y contemplará, al menos:

[illegible]

- a) La remisión de la propuesta de modificación a las organizaciones que participen en ella;
- b) La entrega de un plazo a dichas organizaciones, de al menos cinco días hábiles, para que formulen sus observaciones o aportes, y
- c) La publicación en el sitio web del MINVU de la propuesta y de las observaciones o aportes recibidos.

Artículo 9°. Materias en que pueden realizarse consultas públicas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las SEREMI podrán también efectuar consultas ciudadanas virtuales, presenciales o simplificadas respecto de otros temas o materias, como, por ejemplo:

- a) Políticas, planes y programas;
- b) Proyectos de Normas;
- c) Proyectos y planes de inversión, tanto habitacionales como urbanos;
- d) Aspectos relativos a la gestión interna y la calidad de los servicios que se entregan a las personas y
- e) Aquéllos que la legislación determine que son materia de participación ciudadana.”.

2.- El resto de la resolución exenta N° 3.288, de 8 de mayo de 2015, se mantiene vigente, sin variaciones.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

(IdDO 911607)

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 555 EXENTA, DE 2015, Y SUS MODIFICACIONES, QUE LLAMA A POSTULACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DS N° 49, DE 2011, CUYO TEXTO FUE REEMPLAZADO POR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DS N° 105, DE 2014, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO HABITACIONAL, TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS, PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DEL MES DE ABRIL DE 2014 QUE AFECTÓ A LA COMUNA DE VALPARAÍSO, EN EL SENTIDO QUE INDICA

Santiago, 3 de junio de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 3.884 exenta.

Visto:

- a) El DS N° 49 (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por artículo primero del DS N° 105 (V. y U.), de 2014, que reglamenta el Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda;
- b) El DS N° 947, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 14 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial del 16 de abril de 2014, que señala como zona afectada por catástrofe derivada de incendio a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar y dispone medidas que indica;
- c) La resolución exenta N° 3.052, de fecha 26 de mayo de 2014, publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2014, y sus modificaciones, y la resolución exenta N° 554, de fecha 27 de enero de 2015, publicada en el Diario Oficial del 30 de enero de 2015, ambas de Vivienda y Urbanismo, que dispusieron llamados especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales regulados por el DS N° 1 y el DS N° 49, ambos de Vivienda y Urbanismo, de 2011, para los damnificados por el incendio del mes de abril de 2014 que afectó a la comuna de Valparaíso;
- d) La resolución exenta N° 555 (V. y U.), de fecha 27 de enero de 2015, y sus modificaciones, que llama a postulación en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de

Vivienda, regulado por el DS N° 49 (V. y U.), de 2011, en la alternativa de postulación colectiva con proyecto habitacional, tipología de construcción en nuevos terrenos, para los damnificados por el incendio del mes de abril de 2014 que afectó a la comuna de Valparaíso;

Considerando:

La necesidad de modificar algunas de las condiciones relativas a las fechas y a los procedimientos del llamado especial para familias damnificadas del incendio ocurrido en la comuna de Valparaíso en el mes de abril del año 2014, dicto la siguiente,

Resolución:

Modifícase la resolución exenta N° 555 (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones, en el siguiente sentido:

- 1. Reemplázase en el Resuelvo 1. la frase “1 de junio de 2015.”, por la frase “30 de junio de 2015.”.
- 2. Reemplázase la letra a) del Resuelvo 2. por la siguiente:

“a) A medida que los proyectos sean calificados, el SERVIU organizará una exposición para que los damnificados puedan conocerlos para su posterior inscripción.”.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Secretaría Regional Ministerial II Región de Antofagasta

(IdDO 911593)

LLAMADO EXTRAORDINARIO 2015 A POSTULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD REGULADA POR EL CAPÍTULO II, PARA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. FIJA CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN, EL MONTO DE RECURSOS DISPONIBLES Y SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CADA REGIÓN

(Resolución)

Núm. 376 exenta.- Antofagasta, 1 de junio de 2015.

Visto:

- 1. El decreto supremo N° 255 (V. y U.), de 2006 y sus modificaciones, que regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- 2. La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año 2015 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los recursos destinados, entre otros, a la atención a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar regulado por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006.
- 3. El oficio N° 101 de fecha 6 de abril del año 2015 del Jefe División Política Habitacional, que envía orientaciones generales para la implementación del llamado especial regional del programa de protección al patrimonio familiar, para vivienda del programa Quiero mi Barrio.
- 4. La resolución exenta N° 533 (V. y U.), de 1997, que fija Procedimiento para Prestación de Servicios de Asistencia Técnica a Programas de Viviendas que indica, y deroga la resolución N° 241 (V. y U.), de 1996.
- 5. La resolución exenta N° 633, 257 y 329 que Aprueba selección de nuevos Barrios para el Programa de Recuperación de Barrios en la Región de Antofagasta para el período comprendido entre los años 2012-2018.

6. El oficio N° 396 de la Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo, de fecha 25 de mayo del 2015, que autoriza la realización de un llamado regional en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del título II mejoramiento de la vivienda y título III ampliación de la vivienda del programa de Protección del Patrimonio Familiar a las viviendas que conforman los barrios del programa de selección 2012, 2013, 2014 y 2015, estableciendo en 34.077 UF los recursos asignados para la selección del proyecto, los que se enmarcan dentro de lo indicado en la resolución exenta N° 110 señalada en el visto b) de la presente resolución.

Considerando:

- a) La necesidad de atender a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar a las viviendas que presenten un alto nivel de deterioro, emplazadas en los polígonos definidos por el Programa de Recuperación de Barrios.
- b) Que las intervenciones a realizar en estas viviendas configuran situaciones de extrema relevancia habitacional para esta Seremi Regional.
- c) Que como parte de la estrategia de intervención en materia de política habitacional para el Mejoramiento de Viviendas y Barrios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha determinado la necesidad de integrar las iniciativas desarrolladas por el Programa de Recuperación de Barrios con las del Programa de Protección del Patrimonio Familiar a objeto de realizar una recuperación integral de las viviendas y Barrios adscritos al Programa de Recuperación de Barrios, dicto la siguiente,

Resolución:

1. Llámese a postulación a las viviendas objeto del Programa emplazadas dentro de los polígonos definidos para los barrios seleccionados por el Programa de Recuperación de Barrios mediante resolución exenta N° 633 de fecha 6 de julio de 2012, resolución exenta N° 257 de fecha 24 de abril de 2013, resolución exenta N° 4.070 de fecha 13 de junio de 2013 y resolución exenta N° 329 de fecha 11 de junio de 2014 de la Región de Antofagasta, para el otorgamiento de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar correspondientes al Título II Mejoramiento de la Vivienda, letras b.1), b.2), b.3) y b.5) del artículo 5° del DS N° 255 (V. y U.) de 2006, destinados a Proyectos de Seguridad de las Viviendas, Habitabilidad de las Viviendas, Mantención de las Viviendas y Obras de Innovación de Eficiencia Energética y Acondicionamiento Térmico, incluyendo las redes de servicio, eventualmente y si es coherente con la estrategia regional de barrios; así como con los recursos disponibles para este llamado especial, se podrán financiar obras del Título III del decreto supremo N° 255 (V. y U.), de 2006, correspondientes a ampliaciones de viviendas. Los postulantes serán seleccionados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi) mensualmente, mediante resolución, a partir del mes de septiembre y noviembre de 2015, que cuenten con calificación hasta el último día hábil del mes que precede la selección correspondientes agosto y octubre del 2015, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, la selección no podrá exceder al 18 de diciembre de 2015.

La Seremi podrá autorizar la postulación de viviendas que estén fuera del polígono del Barrio, siempre que existan antecedentes que permitan indicar que dicha vivienda es parte del Barrio. Para tales efectos, el Secretario Técnico del Programa Barrios extenderá un informe que deberá avalar la situación antes expuesta y en el cual se fundará la autorización de la Seremi.

2. Exímase a los postulantes de este llamado de cumplir con los siguientes requisitos y condiciones del DS N° 255 (V. y U.), de 2006:
- a. De los montos de subsidio regulados por los artículos 6° y 6° bis.
 - b. De lo establecido en el inciso tercero del artículo 15, correspondiente a la incompatibilidad con otros beneficios anteriores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
 - c. De los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 16 para postulaciones al Título II, correspondiente a la calidad jurídica de tenencia de la propiedad y a la Ficha de Protección Social, respectivamente.

- d. De lo establecido en la letra c) y d) del artículo 21, referente a las declaraciones juradas del propietario o asignatario y al requisito de Ficha de Protección Social para el Título II, respectivamente.
- e. De lo indicado en los artículos 23 bis y 23 ter referidos a las tareas que deben desempeñarse en el contexto del Plan de Habilitación Social.
- f. De lo establecido en el artículo 32, y la letra a) del artículo 37, sobre el otorgamiento de un Certificado de Subsidio y su endoso para efectuar pagos.
- g. De lo establecido en el artículo 46, letras a) y b), referido a la calidad de propietario para acceder a un Subsidio de Título II
 - De cumplir con lo señalado en el resuelvo 6° de la resolución exenta N° 7.080 (V. y U.), de 2008, que determina la metodología para definir puntaje de corte para calificar programas habitacionales que indica.

3. Exímase al presente llamado de dar cumplimiento al plazo de publicación en el Diario Oficial de la resolución que convoque a este llamado, a que se refiere el inciso tercero del artículo 13 del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, pudiendo publicarse esta resolución con cinco días corridos de antelación a la fecha de inicio de la postulación.
4. Podrán postular al presente llamado, propietarios, asignatarios o arrendatarios que hayan sido beneficiados por llamados regulares o extraordinarios anteriores, sólo en aquellos proyectos y partidas que no hayan sido intervenidas por el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

Las condiciones señaladas serán certificadas por la Seremi en un proceso previo al ingreso de los proyectos al Serviu.

5. El Serviu revisará las factibilidades técnicas, administrativas, legales y sociales de los proyectos y postulantes y los calificará de acuerdo a los criterios entregados por el DS N° 255 (V. y U.), de 2006, y los establecidos en este llamado extraordinario, para seleccionar mensualmente a los beneficiarios. El Minvu beneficiará a cada una de las familias que cumplan con los requisitos de este Llamado, con un monto de subsidio acorde a la modalidad de postulación y a los montos máximos establecidos en los artículos 13 y 14 de esta resolución.
6. Los recursos disponibles para este llamado, son:

	Región	UF
II	Antofagasta	34.077
TOTAL		34.077

7. Los proyectos seleccionados en la Región serán financiados con los recursos disponibles destinados a este llamado, incluida la Edificación Asistida de Obras, las obras de reparación de fallas graves en redes de servicio o estructura del inmueble, acondicionamiento térmico y de innovaciones de eficiencia energética según la tabla precedente, incluidos los servicios de asistencia técnica. Se podrá financiar, contra informe técnico aprobado por Serviu, la erradicación y/o eliminación de plagas y remoción de cubiertas con asbesto cemento, cuando así sea requerido para la ejecución del proyecto, siempre que se incorpore como una partida complementaria al presupuesto del proyecto.
8. Podrán ser beneficiarios de un subsidio a través del presente llamado extraordinario:
- a. Los propietarios y ocupantes regulares, que estén residiendo en las viviendas, eximiéndose de la Ficha de Protección Social. Los propietarios acreditarán su condición mediante título de dominio o certificado de dominio vigente, o en su defecto, con una declaración jurada.
 - b. Los propietarios y ocupantes regulares de las viviendas, que sean propietarios de más de una vivienda. En el caso de tener dos o más propiedades en el mismo barrio, sólo podrán ser beneficiarios por una de ellas.

- c. Los ocupantes regulares, residentes de las viviendas, acreditarán su condición según sea la calidad en que se ocupa la propiedad:

I. El arrendatario acreditará su condición por alguno de los siguientes medios: presentando el contrato de arriendo; una declaración jurada suscrita por el propietario que compruebe dicha calidad; tres comprobantes de pago mensual de la renta de arrendamiento; o la declaración de dos testigos contestes que pertenezcan al Consejo Vecinal de Desarrollo y den fe de la situación de arriendo.

II. El asignatario deberá acreditar su condición por alguno de los siguientes medios: los instrumentos públicos que lo individualicen como legítimo usuario del inmueble; declaración jurada firmada por el propietario o su representante legal; o certificado emitido para estos efectos por la entidad correspondiente.
- d. Los propietarios o asignatarios, aun cuando hayan sido beneficiados anteriormente con un subsidio del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, siempre que sea para la ejecución de obras diferentes de aquellas para las cuales recibieron un subsidio anterior.
9. Los propietarios beneficiarios de este subsidio podrán postular a futuros llamados del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para la postulación de obras distintas de aquellas con las que resultaron beneficiados por el presente llamado. Los no propietarios podrán postular a los llamados del DS N° 49 (V. y U.), de 2011, y DS N° 1 (V. y U.), de 2011.
10. Los Planes de Habitación Social considerarán los siguientes requerimientos para su pago, tendientes a integrar dicho Plan con el Plan de Gestión Social de Recuperación del Barrio:

	PPPF en Barrios Llamado Especial
Títulos	Título II: Mejoramiento de la Vivienda (foco en Habitabilidad y Seguridad de la Vivienda)
Ahorro Mínimo	1 UF adulto mayor, 3 UF otros postulantes.
Asistencia Técnica y Social PHS - Descripción Actividades que incluye:	<p>Objetivo: Lograr un mejor proyecto que revitalice al Programa de Recuperación de Barrios con la intervención en la vivienda financiada por el PPPF, dando a conocer a las familias los derechos y deberes que tienen al participar de ambos programas, fortaleciendo su participación durante el desarrollo de las 2 etapas del PHS:</p> <p>Lo relativo a la 1^{era}: PHS en etapa previa a la selección del proyecto: -Al menos 2 reuniones con familias. La primera. difundir Programa con foco en derechos y deberes; La segunda, presentar proyecto a las familias para su aprobación con foco en informar sobre el PHS asociado a la participación de las familias beneficiarias.</p> <p>2^{da}: PHS en etapa de construcción, se sostiene: -Al menos 1 reunión mensual con familias para informar estado de avance de obras: plazos, problemas y posibles soluciones. -Taller Uso y Mantenición de la Vivienda e informar de post venta. -Al menos 1 actividad de capacitación de medidas al interior de la vivienda para reducción de riesgos de desastres (naturales y antrópicos). -Al menos 1 actividad comunitaria en el espacio público de valoración de la vivienda y su aporte a la revitalización del barrio, orientado y validado por el Plan de Gestión Social del barrio, según ejes transversales relevantes (Patrimonio e Identidad, Medio Ambiente y Seguridad). -Incentivar la postulación al Título 1 de PPPF Llamado regular, orientado a financiar obras en el espacio público de acuerdo al Plan Maestro de Recuperación del Barrio cuando corresponda.</p>

11. El presente llamado beneficiará a los postulantes mediante dos modalidades, de acuerdo a las características de las reparaciones que se requieran y en atención a los requerimientos del postulante. Podrá postularse a ambas modalidades, solo de manera sucesiva, sin importar el orden:
- a. Edificación mediante Constructora

b. Edificación Asistida de Obras.
12. No obstante lo anterior, los proyectos de ambas modalidades podrán ser presentados de manera simultánea a Serviu, quien los aprobará técnicamente en el mismo acto, de modo que una vez concluida(s) la(s) obra(s) de una modalidad, se proceda a la postulación y Selección de beneficiarios, para dar paso a la ejecución de las obras de la segunda modalidad.
13. Para el caso de la Edificación mediante Constructora, el monto del subsidio a asignar por postulante hábil beneficiado será de hasta 70 UF, para financiar obras del Título II letras b.1), b.2), b.3) y b.5).

Para la ejecución de obras que atiendan problemas en la vivienda asociados al suelo salino podrá disponerse de un incremento de hasta 55 UF por beneficiario. Los proyectos podrán acceder a financiamiento complementario por erradicación de plagas de hasta 15 UF por beneficiario, y por remoción de elementos de asbesto cemento (celosías, cubiertas, tabiquerías) de hasta 25 UF por beneficiario. El monto de subsidio que no se aplique en estos proyectos, podrá utilizarse en otras obras de la vivienda.

MONTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

Tramo	Subsidio Base	Incremento por tipo de Proyecto				Incremento por temáticas específicas (se suman al subsidio base)					
		Mantenión de la vivienda	Seguridad de la vivienda	Habitabilidad de la vivienda	Patrimoniales o antiguas		Accesibilidad Universal	Suelos Salinos	Asbesto cemento	Plagas	Adulto mayor
					Seguridad	habitabilidad					
1	55	0	35	25	150	100	30	40	15	15	15
2	65	0	40	35	165	115	35	50	20	15	20
3	65	0	45	40	180	130	40	55	25	15	25
4	70	0	50	45	200	150	45	60	30	15	30
Requisitos					Viviendas patrimoniales o construidas antes del año 1931		Copia de la credencial de discapacidad vigente	Regiones del Norte Grande con autorización SEREMI	Sólo con Acreditación SERVIU	Con acreditación SERVIU	Sólo cuando el postulante o su cónyuge es adulto mayor

- * El subsidio base podrá complementarse, si así lo requiere el proyecto, con un solo complemento por tipo de obra.
- * El valor del subsidio podrá complementarse según temáticas específicas, las que serán debidamente justificadas en cada proyecto.

MONTOS PARA AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA

Montos de Subsidios (U.F.)							
Tramo comuna	Subsidio Base		Incremento por Temáticas Específicas				
	inferior a 32m2	32m2 o más	Adulto Mayor	Accesibilidad Universal	Ampliación en 2º piso	Solución Sanitaria Particular	Asbesto Cemento
1	(43-m2viv) x 10	120	70	30	40	80	15
2	(43-m2viv) x 11	130	75	35	45	90	20
3	(43-m2viv) x 12	140	80	40	50	100	25
4	(43-m2viv) x 13	155	85	45	55	110	30
Requisitos			Mínimo 2 Recintos	Sólo con certificado SENADIS	Sólo ampliación en 2º piso	Sólo para baños en áreas rurales	Sólo para ampliación en 2º piso

- En caso de las ampliaciones en viviendas de menos de 32 m², se exigirá que la superficie final de la vivienda tras la aplicación del subsidio llegue hasta los 43 m² y que tenga a lo menos 3 recintos habitables, baño y cocina. Esta última podrá estar integrada dentro de uno de los recintos habitables. Tratándose de proyectos de ampliación, el Seremi podrá autorizar la postulación de proyectos que, en razón de las características del terreno y por la aplicación de la normativa vigente, se vean impedidos de cumplir los tamaños indicados para los respectivos recintos en el Cuadro Normativo ya referido.
14. Para la Edificación Asistida de Obras se podrá acceder a 60 UF por postulante, destinados a financiar la adquisición de materiales de construcción para la ejecución de obras, siendo el beneficiario el responsable de gestionar la mano de obra necesaria o encargarse de su realización de manera personal y acompañado de asistencia técnica. Las obras a ejecutarse mediante esta modalidad no permitirá la ejecución de partidas que comprometan la reparación o construcción

de elementos estructurales o que alteren o intervengan la red sanitaria, de gas o eléctrica, siendo factible la construcción de tabiquerías, instalación de terminaciones de pisos, muros y cielos, cambio o reparación de ventanas, puertas, artefactos sanitarios y de cocina, instalación de cubiertas que no sean de asbesto cemento, aplicación de pintura, impermeabilización o anticorrosivos, etc.

MONTOS PARA EDIFICACIÓN ASISTIDA DE OBRAS

Los montos de subsidio a otorgar en los proyectos de Edificación Asistida de Obras corresponderán a los señalados en la tabla siguiente:

Tramo comuna	Subsidio	Tramo Monto Subsidio	Edificación Asistida de Obras UF
	Innovación en Eficiencia Energética		
1	50	1	40
2	55	2	45
3	60	3	50
4	65	4	60

15. Para la implementación de esta modalidad una vez aprobados los proyectos por parte de Serviu, este procederá con la entrega de una tarjeta al beneficiario, individualizada con sus datos, la cual le permitirá realizar hasta un máximo de 4 compras de materiales de construcción en centros ferreteros y/o lugares relativos a la venta de éstos, con un máximo del 10% por cada compra para la adquisición de herramientas.

Al momento de recibir la tarjeta, el beneficiario deberá suscribir ante el Serviu una declaración jurada, la que deberá contener las siguientes estipulaciones:

- a. Obligarse a utilizar los materiales de construcción adquiridos mediante este subsidio, en la realización de obras de mejoramiento de su vivienda.
- b. Comprometerse a ejecutar las obras, siguiendo las indicaciones técnicas impartidas por el Prestador de Servicios de Asistencia Técnica.
- c. Contar con los medios para gestionar de manera personal, la mano de obra con la que se ejecutarán las obras de mejoramiento de la propiedad, o en su defecto, poder realizarla personalmente.
- d. Declarar estar en pleno conocimiento que la mala utilización de este subsidio facultará a Serviu para solicitar la restitución parcial o total del monto de subsidio otorgado, y perseguir las acciones civiles y penales que ello implique si se determina que se ha generado algún perjuicio hacia un tercero.

Los establecimientos en los cuales podrán ser adquiridos los materiales de construcción deberán cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 22 de la presente resolución.

16. Para la presentación de proyectos que integren la modalidad de Edificación Asistida de Obras, deberá incluirse un presupuesto separado de los materiales que se requieran para las partidas de la obra a ejecutarse mediante la mano de obra del beneficiario.

Este presupuesto será en pesos, con IVA incluido y estará ordenado en 2 etapas, la primera comprenderá hasta la utilización aproximada del 35% del monto del subsidio y la segunda, el 65% restante.

La conversión del monto del subsidio, desde Unidades de Fomento a pesos, se realizará con el valor de la UF correspondiente a la fecha de la presentación del proyecto.

17. Una vez aprobado el proyecto, la Entidad Patrocinante (EP) deberá digitar en el sistema informático del Minvu los datos correspondientes al proyecto de reparación asistida, con el fin de activar la tarjeta que le permitirá al beneficiario realizar la compra de los materiales de construcción equivalentes a la primera etapa del presupuesto.

18. Una vez activada la primera carga de la tarjeta, el beneficiario dispondrá de aproximadamente el 35% del monto del subsidio y podrá realizar un máximo de 2 compras de materiales de construcción, en cualquier establecimiento con convenio, no pudiendo superar estas compras, el monto máximo asignado para la primera etapa.

Cualquier saldo de dinero a favor del beneficiario que quedase disponible de la primera carga, se traspasará automáticamente a la segunda carga.

19. Concluida la ejecución de las obras, y habiendo utilizado los materiales adquiridos con la primera carga, podrá hacerse efectiva la segunda carga de la tarjeta. Para ello, la EP/PSAT deberá informar al Serviu respecto del cumplimiento de la primera etapa y será este último el responsable de activar la segunda carga de la tarjeta por el equivalente al saldo del monto del subsidio adjudicado.
20. Una vez activada la segunda carga de la tarjeta, se permitirá al beneficiario un máximo de 2 compras. Si una vez realizada la segunda compra de la segunda etapa, quedase algún saldo de dinero en la tarjeta, éste no podrá ser utilizado.
21. La EP deberá brindar asesoría técnica a las familias de acuerdo a las obligaciones indicadas en la resolución N° 533 (V. y U.), de 1997. Adicionalmente, en caso que el proyecto incorpore obras asociadas al Banco de Materiales, la EP deberá cumplir con las siguientes labores:

- a. Proporcionar apoyo técnico a los beneficiarios sobre los procedimientos técnicos y aspectos a considerar en todos los procesos constructivos que se ejecutarán en la propiedad.
- b. Otorgar por escrito el visto bueno de las obras una vez concluida la primera etapa ejecución. Esto será requisito para la activación de la segunda carga de la tarjeta.
- c. Una vez terminada la intervención en la vivienda y para acreditar la finalización de las obras, se exigirá a la EP el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentos:
 - i. Visto bueno en el sistema informático del Minvu en un módulo especialmente habilitado para ello.
 - ii. Informe Técnico donde queden consignadas las principales observaciones que éste visualice al proceso constructivo, donde se dé fe que los materiales adquiridos por el beneficiario fueron utilizados en la obra y que éstas se desarrollaron de acuerdo al apoyo técnico que él proporcionó.
 - iii. Documento suscrito por el beneficiario que indique su conformidad con el trabajo realizado por la EP, según documento tipo proporcionado por el Serviu para estos efectos.

22. El monto y el pago de los honorarios de la Asistencia Técnica correspondiente a los proyectos que regula la presente resolución, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 533 (V. y U.), de 1997.

Tipos de proyectos	TRAMO COMUNA	Organización de la demanda y Diagnóstico Técnico (Aplica siempre)	Regularización de la Vivienda	Elaboración y gestión del Proyecto	Plan de habilitación social	Total a pagar por subsidio
Proyectos de Mejoramiento para la Habitabilidad de la Vivienda Título II, letra b2 (incluye ITO)	TRAMO 1	3	3	3,5	1,5	11
	TRAMO 2	3	3,5	4	1,5	12
	TRAMO 3	4	3,5	4,5	1,5	13,5
Proyectos de Mejoramiento para la seguridad de la Vivienda Título II, letra b1 (incluye ITO)	TRAMO 4	4	4	5	2	15
	TRAMO 1	3	3	4,5	1,5	12
	TRAMO 2	3,5	3,5	4,5	1,5	13
	TRAMO 3	4	3,5	5	1,5	14
Proyectos de Obras de Innovación en Eficiencia Energética Título II, letra b5 (incluye ITO)	TRAMO 4	4	4	6	2	16
	TRAMO 1	3	3	3,5	1,5	11
	TRAMO 2	3	3,5	4	1,5	12
	TRAMO 3	4	3,5	4,5	1,5	13,5
	TRAMO 4	4	4	5	2	15

Tipos de proyectos	TRAMO COMUNA	Organización de la demanda y Diagnóstico Técnico (Aplica siempre)	Regularización de la Vivienda	Elaboración y gestión del Proyecto de Ampliación de la Vivienda Título III (Incluye ITO, Aplica siempre)	Plan de habilitación social (Aplica siempre)	Total a pagar por subsidio
Servicios de Asistencia Técnica subsidio Vía Constructora Título III	TRAMO 1	3	3,5	3,5	1,5	13
	TRAMO 2	3	3,5	5,5	1,5	12
	TRAMO 3	3,5	3,5	5,5	2	13,5
	TRAMO 4	4	4	6	2	16

Tipos de proyectos	TRAMO COMUNA	Organización de la demanda y Diagnóstico Técnico (Aplica siempre)	Regularización de la Vivienda	Elaboración y gestión del Proyecto (Aplica siempre)	Plan de habilitación social (Aplica siempre)	Total a pagar por subsidio
Servicios de Asistencia Técnica subsidio Vía Autoconstrucción asistida	TRAMO 1	3	3	3,5	1,5	11
	TRAMO 2	3	3,5	4	1,5	12
	TRAMO 3	4	3,5	4,5	1,5	13,5
	TRAMO 4	4	4	5	2	15

Quando se trate de proyectos que se hayan presentado simultáneamente o sucesivamente a ambas modalidades, se cancelarán por una sola vez los honorarios destinados a Diseño de Proyectos y Organización de la Demanda. En tanto, los honorarios referidos a la Inspección Técnica de Obras se cancelarán por cada modalidad de proyecto.

En caso que el beneficiario no concrete la aplicación del subsidio porque la EP determina que las obras no se han realizado de acuerdo a sus instrucciones, o ha detectado alguna anomalía en el proceso, este deberá informar a Serviu y se le cancelará solo 1 UF.

23. Aquellos proveedores de materiales de construcción que participen en este Programa, deberán dar cumplimiento de los siguientes requisitos:
- a. Suscribir un convenio con el Serviu respectivo, que deberá considerar al menos, las siguientes estipulaciones:

i. Contar con acceso a internet para realizar las operaciones que se indican en los puntos sucesivos.

ii. Comprometerse a utilizar correctamente la clave personal que le será otorgada, mediante la cual podrá tener acceso como usuario externo al sistema informático del Minvu, para el registro de las ventas de materiales de construcción que este realice.

iii. Estar en conocimiento del listado de materiales que podrá vender a las familias beneficiadas con este subsidio, el cual se adjunta como anexo a la presente resolución.

iv. Vender solamente los materiales autorizados en la lista que se refiere al punto precedente y/o aquellos autorizados por Serviu mediante resoluciones regionales. Adicionalmente, comprometerse a vender a los beneficiarios, sólo los materiales que vengán detallados en el presupuesto que ellos presenten, el cual habrá sido elaborado por EP/PSAT y aprobado por Serviu.

v. Declarar conocer la documentación requerida por Serviu, para realizar el cobro de las ventas realizadas, las cuales encuentran detallan el presente documento.

vi. En caso de existir cambio de materiales de construcción por parte del beneficiario, no reembolsar bajo ningún argumento, dinero en efectivo al mismo sino sólo otros materiales autorizar la lista respectiva.

vii. Conocer las condiciones generales del Programa y, con ello, estar en conocimiento que el no cumplimiento de requisitos y compromisos suscritos en dicho Convenio facultará a Serviu para determinar su eliminación del listado de proveedores de materiales de construcción, sin perjuicio de perseguir las acciones civiles y penales que ello implique si se determina que ha generado algún perjuicio hacia un tercero.

- b. Previo a la realización de una venta, el proveedor deberá verificar la identidad del beneficiario, solicitar la tarjeta que lo hace acreedor del subsidio y comprobar con ello la existencia de saldo disponible para la realización de la compra de materiales, a través del sistema informático del Minvu.
- c. Generar una boleta o factura a nombre del beneficiario, con el detalle del monto unitario de cada uno de los materiales vendidos.
- d. Registrar en sistema informático del Minvu, los datos de la venta realizada y, con ello, imprimir en forma inmediata, el comprobante que le entregará el sistema informático con los datos de la operación y un código de validación de la misma, el cual deberá ser firmada por el beneficiario y por la persona que realiza la venta de materiales.

24. Para el pago a los proveedores de materiales de construcción, Serviu solicitará los siguientes antecedentes:
- a. Comprobante con código de validación de la operación, entregado por el soporte informático del Minvu, el cual debe encontrarse firmado por el proveedor y por el beneficiario.

b. Copia de Factura o Boleta, con detalle y cantidad de materiales entregados, y en caso de no constar e éstos, deberá acompañarse copia de la correspondiente Guía de Despacho, debiendo estar firmada por el beneficiario como forma de acreditar la recepción conforme de los materiales.
25. Serviu deberá revisar el detalle de las boletas y/o facturas presentadas por el proveedor y sólo pagará aquellos materiales de construcción aprobados en el presupuesto elaborado por la EP.
26. En caso que algunos de los elementos detallados en la boleta o factura no se encuentren incluidos en el listado a que se refiere el inciso precedente, dicho documento podrá ser cancelado igualmente; sin embargo, estos elementos serán descontados y no se considerarán en la liquidación del monto a pagar.
27. Los proyectos postulados deberán contar con un Acta de Aprobación de la Obra, firmada por cada postulante del grupo organizado.
28. Para el presente llamado no se requerirá la emisión de certificados de subsidio. Los pagos de obras serán realizados contra actas de conformidad firmadas por el beneficiario del subsidio o por el representante legal del grupo postulante y una declaración de conformidad de la Seremi, además de los informes y antecedentes requeridos y aprobados por Serviu.

Quando se trate de proyectos aprobados mediante la modalidad de Edificación Asistida de Obras, la EP/PSAT deberá adjuntar además un informe que certifique que los materiales adquiridos por el beneficiario fueron utilizados en la obra y que las partidas fueron desarrolladas de acuerdo al proyecto técnico aprobado por Serviu. Esto se entenderá como parte de las labores de Inspección Técnica de Obras. Dicho informe será requisito para el pago de dicha labor y para el pago indicado en el numeral 22 de la presente resolución.

29. El ahorro mínimo exigido será el indicado en el artículo 9° del DS N° 255 (V. y U.), de 2006, correspondiente a 3 UF por postulante. No obstante lo anterior, las tres UF podrán enterarse en dos partes; la primera parte de 1.5 UF mediante depósito libreta de ahorro individual por cada una de las familias, debiendo concretarse el último día del mes anterior a la postulación. La segunda parte, el saldo de 1.5 UF podrá complementarse de manera colectiva y/o con aportes de terceros, a través de un depósito a plazo, debiendo enterarse el último día hábil antes de la postulación. Ambas modalidades deben ser acreditadas junto con los demás antecedentes del proyecto.

Solo en caso que el postulante sea adulto mayor el ahorro podrá ser de 1 UF.

En casos de no disponer de cuentas de ahorro, los representantes legales del grupo organizado podrán tomar depósitos a plazo endosables a favor del Serviu respectivo, por un monto en UF equivalente a la suma total del ahorro mínimo exigido a cada postulante.

El ahorro enterado mediante libretas de ahorro colectivas o individuales, deberá cumplir con las condiciones establecidas en la letra f) del artículo 21 del decreto supremo 255 (V. y U.), de 2006. En caso de postular con depósito a plazo, los

documentos de acreditación deberán ser de fecha anterior al día del ingreso del proyecto a Serviu, con una vigencia mínima de 12 meses.

30. En todo aquello no regido por el presente llamado, se aplicarán las disposiciones que correspondan del DS Nº 255 (V. y U.), de 2005.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Mauricio Zamorano Muñoz, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta.

Secretaría Regional Ministerial VII Región del Maule

(IdDO 911591)

INFORMA LLAMADO EXTRAORDINARIO 2015 A POSTULACIÓN PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD REGULADA POR CAPÍTULO II

(Extracto)

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule informa que con fecha 28 de mayo de 2015 se ha emitido resolución exenta Nº 779:

Llamado Extraordinario 2015 a postulación para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en su modalidad regulada por el Capítulo II, para la Región del Maule, en barrios de selección 2014 del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio”. Fija condiciones para su aplicación y el monto de recursos disponibles.

Dicha resolución, se encuentra disponible en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule ubicada en 1 Oriente 1150, tercer piso, Talca.

Rodrigo Sepúlveda Espinoza.- Secretario Regional Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región del Maule.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

(IdDO 911601)

DESIGNA CONSEJEROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue: Núm. 152.

Vistos:

- a) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones y sus modificaciones;
- b) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
- c) El decreto supremo Nº 353, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sus modificaciones;

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

IDENTIFIQUE SU PUBLICACIÓN
CON UN NÚMERO ÚNICO

¿Qué es el IdDO?

El **IdDO** (Identificador del Diario Oficial) es un número único e irrepetible asignado por el Diario Oficial a cada documento publicado en su edición impresa. Este código aparece al inicio de cada documento, antes de su título. En la Edición Societaria Electrónica (creada por la ley 20.494) este **IdDO** se denomina CVE.

¿Para qué sirve?

Para Referenciar e Identificar una publicación con precisión. En el caso de usuarios privados, que realizan solicitudes de publicación particulares o judiciales, estos podrán, con dicho número, informar a los organismos que lo requieran, que la publicación fue efectivamente realizada, sin necesidad de requerir datos como “Fecha y Nºs de Edición, Cuerpo y Página”.

Para la publicación de normativas de carácter general (Cuerpo I del Diario Oficial), los organismos del Estado y privados podrán referenciar una norma usando solo este número o bien sumándolo a la fecha de publicación.

¿Desde cuándo se usa?

El **IdDO** comienza a asignarse a cada documento publicado, desde el **lunes 27 de abril de 2015**.



- d) El decreto supremo N° 283, de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que designa consejeros del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante “el CDT”;
- e) El ingreso Subtel N° 29.538, de 4 de marzo de 2014, carta del Sr. Domingo Cruzat Amunátegui, Consejero del CDT por la Zona Centro, por medio del cual presenta su renuncia al cargo;
- f) El ingreso Subtel N° 35.710, de fecha 19 de marzo de 2014, carta del Sr. Rolando Hernández Mellado, Consejero del CDT por la Zona Sur, por medio de la cual pone su cargo a disposición;
- g) Los oficios Ord. N° 6.736/GFDT 303 y 6.775/GFDT 306, de fechas 23 y 24 de julio de 2014, por medio de los cuales el Presidente del CDT remite terna para designación por S.E. la Presidenta de la República del cargo de Consejero del CDT por las Zonas Centro y Sur, respectivamente;
- h) Los Oficios Gabinete Presidencial N° 1522 y 1523, ambos de fecha 21 de agosto de 2014, que designan Consejeros del CDT de las Zonas Sur y Centro, respectivamente;
- i) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

Considerando:

1. Que, mediante el ingreso Subtel del literal e) de los Vistos, el Consejero de la Zona Centro del CDT, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Sr. Domingo Cruzat Amunátegui, presentó su renuncia al cargo al cual fue designado por medio del decreto supremo del literal d).
2. Que, mediante el ingreso Subtel del literal f) de los Vistos, el Consejero de la Zona Sur del CDT, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Sr. Rolando Hernández Mellado, puso su cargo a disposición y se manifestó dispuesto a participar y aportar en las áreas en donde se estime conveniente;
3. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 28° B de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en relación a lo establecido en los artículos 3° y 4° del Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, descrito en la letra c) de los Vistos, el Presidente del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a través de los oficios Ord. descritos en el literal g) de los Vistos, remitió a S.E. la Presidenta de la República, la terna respectiva para proceder a la designación de los Consejeros del CDT de las zonas ya individualizadas en los Considerandos anteriores;
4. Que, al efecto, las personas que serán designadas como Consejeros del CDT, cumplen con los requisitos legales y reglamentarios para detentar tales calidades; y
3. Que, resulta necesario proceder a la ratificación y al nombramiento de los Consejeros del CDT, los cuales son designados por S.E. la Presidenta de la República en su calidad de profesionales con experiencia en el área de telecomunicaciones y vinculados a las diversas regiones del país.

Decreto:

1. Designase al don Luciano Sebastián Ahumada Fierro, RUT N° 13.851.115-4, ingeniero civil electrónico, como Consejero por la Zona Centro del país.
2. Ratifícase el decreto N° 283, de 18 de octubre de 2010, en lo pertinente a la designación de don Rolando Manuel Hernández Mellado, RUT N° 7.386.463-1, licenciado en física, como Consejero por la Zona Sur del país.

Por razones de buen servicio, las personas señaladas asumirán su cargo en la fecha del presente decreto, sin esperar su total tramitación.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pedro Huichalaf Roa, Subsecretario de Telecomunicaciones.

(IdDO 911602)

RATIFICA CONSEJERO DEL CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Santiago, 29 de diciembre de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue: Núm. 212.

Vistos:

- a) La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones y sus modificaciones;
- b) El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
- c) El decreto supremo N° 353, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sus modificaciones;
- d) El decreto supremo N° 103, de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que designa Consejero del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante “el CDT”;
- e) Oficio Ord. N° 8.439/GFDT 346, de fecha 10 de septiembre de 2014, por medio del cual el Presidente del CDT remite terna para designación por S.E. la Presidenta de la República del cargo de Consejero del CDT por la Zona Norte del país;
- f) Ingreso Subtel N° 145.766, de 16 de diciembre de 2014, el cual traslada el Oficio Gabinete Presidencial N° 2.344, de fecha 15 de diciembre de 2014, que designa Consejero del CDT de la Zona Norte del país, y
- g) La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

Considerando:

- 1.- Que mediante decreto supremo N° 103, de 2013, descrito en el literal d) de los Vistos, se procedió al nombramiento de don Juan Carlos Valdebenito Samit, como Consejero de la Zona Norte del país, para el CDT;
- 2.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28° B de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en relación a lo establecido en los artículos 3° y 4° del Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, descrito en la letra c) de los Vistos, el Presidente del CDT, a través del oficio Ord. descrito en el literal e) de los Vistos, remitió a S.E. la Presidenta de la República, la terna respectiva para proceder a la designación de los Consejeros del CDT de la Zona Norte del país;
- 3.- Que, mediante oficio Presidencial detallado en el literal f) de los Vistos S.E. la Presidenta de la República, ratificó la designación de don Juan Carlos Valdebenito Samit, para el cargo de Consejero de la Zona Norte del CDT;
- 4.- Que, la persona cuya designación se realiza por parte de S.E. la Presidenta de la República, ratifica su nombramiento como Consejero del CDT y cumple con los requisitos legales y reglamentarios para detentar tal calidad; y
- 5.- Que, resulta necesario proceder a la ratificación del Consejero para la Zona Norte del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones CDT, el cual es designado por S.E. la Presidenta de la República en su calidad de profesional con experiencia en el área de telecomunicaciones y vinculado -para este caso- a la Zona Norte del país.

Decreto:

Ratifícase el decreto N° 103, de 27 de junio de 2013, en lo pertinente a la designación de don Juan Carlos Valdebenito Samit, RUT 4.822.372-9, ingeniero civil electrónico, como Consejero del CDT por la Zona Norte del país.

Por razones de buen servicio, las personas señaladas asumirán su cargo en la fecha del presente decreto, sin esperar su total tramitación.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pedro Huichalaf Roa, Subsecretario de Telecomunicaciones.

MÁS FACILIDAD DE LECTURA Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN



Para una mayor facilidad de búsqueda, lectura y archivo de nuestros usuarios, el Diario Oficial brinda una forma de diagramación y ordenamiento más expeditos de sus materias principales:

CUERPO I
Leyes, reglamentos y decretos de orden general.

CUERPO II
Decretos y normas de interés particular.

Publicaciones judiciales y avisos destacados.

SUPLEMENTO DE MARCAS Y PATENTES
Marcas, patentes y otros documentos de propiedad industrial.

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública